

LA CCIODH EN LA PRENSA MEXICANA



La Jornada 11 de septiembre de 2001

De Génova a Chiapas
Luis Hernández Navarro

Ser víctimas de una globalización que crea nuevos excluidos y erosiona los derechos sociales, conquistados durante décadas de lucha, convierte a los ciudadanos en consumidores y aleja a los gobernantes de la población, lo cual ha provocado el surgimiento de un nuevo actor político

Las jornadas de protesta en Génova, Italia, de 19, 20 y 21 de julio en contra de la realización de la cumbre del G-8, estimularon el debate y la organización de la izquierda social italiana y fueron un punto de inflexión en su desarrollo.

Al calor de esta reanimación se ha reagrupado y redefinido la solidaridad con la lucha zapatista. Este 8 y 9 de septiembre, en Marina de Massa, ciudad de la región de Toscana, se reunieron 130 activistas de las redes de apoyo a Chiapas para intercambiar puntos de vista en torno a la nueva situación que se vive en México y para acordar una línea de acción común.

El movimiento frente a la globalización en Italia mostró una impresionante capacidad de convocatoria. En Génova marcharon más de 300 mil personas. Días después, grandes multitudes *tomaron* las calles de las principales ciudades del país donde nació Antonio Gramsci para expresar su indignación ante la represión gubernamental.

Durante todo este tiempo se ha discutido con gran intensidad el futuro de la lucha contra la globalización neoliberal, el papel que juega la desobediencia civil y las tácticas de Black Block (red de grupos de afinidad anarquista que practica la violencia selectiva en contra de los símbolos de la gran propiedad privada), la función de los partidos políticos y las tácticas para enfrentar al gobierno de Berlusconi. En lo inmediato se debate qué hacer en la próxima reunión de la OTAN, que se efectuará en Nápoles a finales de este mes.

En varias regiones, la convergencia que coordinó las protestas, el Foro Social de Génova, se ha transformado en una plataforma de acción política local unificada. Un profundo cambio en las identidades de los globalizados europeos está en marcha. La percepción de ser víctimas de una globalización que crea nuevos excluidos y erosiona los derechos sociales, conquistados durante décadas de lucha, convierte a los ciudadanos en consumidores y aleja a los gobernantes de la población, lo cual ha provocado el surgimiento de un nuevo actor político.

El asedio de las multitudes a quienes escriben la nueva Constitución del mundo les ha hecho sentir las posibilidades que tiene su lucha. Mucha gente encontró que ésta tenía sentido dentro de su país y no sólo apoyando las causas en otras partes del mundo. Una

modificación tan profunda de la izquierda ha transformado también los términos de la solidaridad internacional que practica.

Las redes de apoyo a la rebelión chiapaneca están constituidas por decenas de grupos de distinto signo ideológico. Confluyen en ella organizaciones de solidaridad tradicionales, proyectos políticos que se reclaman zapatistas y que expresan el surgimiento de nuevos actores sociales, movimientos por la paz de inspiración cristiana, el Partido Comunista, núcleos marxista-leninistas y ONG vinculadas con la cooperación internacional.

Durante más de siete años han trabajado de manera ininterrumpida sobre el tema, a pesar de haber sido expulsadas de México y padecido campañas xenófobas. En todo este tiempo no han dejado de apoyar proyectos de educación popular, salud y desarrollo en las comunidades en resistencia. Decenas de ayuntamientos italianos se han hermanado con municipios autónomos zapatistas. Cientos de voluntarios visitan y viven, cada año, en comunidades rebeldes. Lo que han visto, escuchado, leído y padecido en carne propia ha tomado forma en libros, artículos, videos, fotografías y relatos que circulan en parte de la sociedad y de los poderes locales. El pensamiento zapatista se ha divulgado extensamente; forma parte de las coordenadas de reflexión y del quehacer político de la nueva izquierda.

El seminario de Marina de Massa analizó la nueva situación política que se vive en México, la lucha de los pueblos indígenas, el estado actual del zapatismo y la experiencia de Génova. Reflexionó, asimismo, en la necesidad de luchar en Italia como parte de la solidaridad con Chiapas. Debatió sobre los distintos tipos de solidaridad puestos en práctica, tanto en los grupos de origen católico como en los provenientes de la izquierda radical.

Una parte de los asistentes acordó incorporarse a la Tercera Comisión de Observación Civil sobre los Derechos Humanos que se trasladará a México en noviembre. Por último, consideró necesario evaluar el impacto del TLC, firmado entre la Unión Europea y nuestro país. La discusión fue intensa y conceptualmente rica, alejada de los clichés de la izquierda cavernaria.

Las muchas conclusiones a las que se llegó en la reunión pueden resumirse en la manta de la Coordinación Toscana de la lucha zapatista que adornaba el presidium y en la que se leía: "Contra los gobiernos neoliberales: seamos todos zapatistas."

La Jornada 20 de enero de 2002

**Entrevista con Armando de Matthaéis del Centro Social italiano Intifada
Marta Duran**

Los hermanos zapatistas y toscanos

"Los hermanamientos nos dan la pauta para un nuevo tipo de solidaridad donde lo importante no es sólo entablar relaciones con las comunidades indígenas, sino un intercambio entre los pobladores de ambos lados del mar. Las organizaciones aportan proyectos productivos, que es algo bueno y necesario, pero es un tipo de solidaridad muy vieja, unidireccional, que pone énfasis en el dinero. No queremos que todo termine con la firma del alcalde, sino que sea un primer paso para un acercamiento real entre las personas", cuenta uno de los impulsores del hermanamiento entre los municipios autónomos zapatistas y ciudades del país de la bota. En febrero estarán en México algunos de los hermanos italianos como parte de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

En los últimos días del pasado noviembre estuvo en Chiapas una delegación compuesta por activistas sociales, dos alcaldes de la Toscana y su equipo, quienes hermanaron tres municipios autónomos zapatistas con tres ciudades italianas. Armando de Matthaeis del Centro Social Intifada ha sido el enlace entre todos y en entrevista explica:

"Cuando se crearon los municipios autónomos zapatistas, los grupos de solidaridad italianos discutimos cuál sería la mejor manera de ayudar a estas comunidades. Las alcaldías y los centros sociales llegamos a la conclusión que el hermanamiento era una buena propuesta. Este tipo de acercamientos entre ciudades es una tradición que empezó en los setenta. Los primeros que Italia entabló fueron con ciudades españolas y francesas, en un sentido meramente cultural con intercambios artísticos; después vinieron los hermanamientos económicos que coincidieron con los primeros intentos de la formación de la Comunidad Económica Europea. A los intercambios culturales les sucedieron los políticos acompañados de apoyo económico a diversos proyectos productivos. La alcaldía de Empoli, provincia de Florencia, es de centro-izquierda y aceptó. Los hermanamientos se hacen a muy alto nivel; los gobiernos preparan a todas sus instancias e instituciones, pero en el caso de los municipios autónomos, como no tienen un reconocimiento oficial por parte del gobierno mexicano, se hizo directamente con ellos. Legalmente los llamamos pactos de amistad.

"La Toscana italiana tiene una tradición de izquierda de más de 50 años. Ahora tenemos en la región un gobierno de centro pero con una administración muy abierta a la izquierda. Empoli tiene 50 mil habitantes; es una ciudad rica, no tiene problemas de desarrollo ni de desempleo y puede permitirse el ayudar a regiones pobres.

"Nuestro Centro Social Intifada desde 1994 promovió el debate sobre el internacionalismo y sobre Chiapas. Llevamos la propuesta de hermanamiento a la Coordinadora Toscana de Apoyo a la Lucha Zapatista que está formada por diversas organizaciones como Manitese de Lucca y el Colectivo Follonica. La Coordinadora Toscana desarrolló un trabajo doble: por un lado, informar, convencer a las alcaldías de entablar relaciones con movimientos de la izquierda, y por otro, preparar los proyectos y contactos para realizar los hermanamientos con los municipios autónomos zapatistas.

"La primera alcaldía que aceptó un hermanamiento con Chiapas fue la de Empoli en 1998, y lo hizo con el municipio autónomo de San Juan de la Libertad (antes El Bosque) gracias a que el Centro Social Intifada tenía un trabajo solidario muy intenso con Chiapas desde enero de 1994 y fue el que convocó y organizó la Coordinadora Toscana por la Lucha Zapatista.

"Después vinieron otras iniciativas de propaganda. El trabajo de la Coordinadora Toscana no gira únicamente en torno a los hermanamientos, sino que queremos unir la lucha en contra del neoliberalismo con la de los zapatistas.

"Los hermanamientos nos dan la pauta para un nuevo tipo de solidaridad donde lo importante no es sólo entablar relaciones con las comunidades indígenas, sino un contacto, un intercambio, con los pobladores, hombres, mujeres y niños comunes, en ambos lados del mar. Buscamos una solidaridad entre las personas, horizontal, transparente, más que entre organizaciones. Los grupos de ayuda italianos aportan proyectos productivos, que es algo bueno y necesario, pero es un tipo de solidaridad muy vieja, unidireccional, que pone énfasis en el dinero. Con los hermanamientos que hemos realizado llegó financiamiento a las comunidades, pero también relaciones sociales. No queremos que todo termine con la firma del alcalde, sino que sea un primer paso para una comunicación, un acercamiento real entre las personas. Ahora les voy a explicar qué quiero decir con esto:

"En 1999 llegó la primera delegación toscana compuesta por miembros del Movimiento Antagonista Toscano, del Centro Social Intifada y el vicealcalde de Empoli Massimo Marconcini. Con esa visita se formalizó el hermanamiento entre San Juan de la Libertad y la ciudad de Empoli. Hubo una fiesta donde las autoridades del municipio autónomo y el vicealcalde firmaron una carta donde se dice que su lucha es nuestra lucha; se entregó dinero para la escuela que albergará a mil 800 niños y arrancó una colecta de material didáctico. Fue una ceremonia muy solemne, muy emotiva, donde Marconcini recibió el sombrero ceremonial. Se hizo entrega de una colección de dibujos hechos por los niños de Empoli que enviaron a los niños indígenas. Después tuvimos música y baile. El intercambio de dibujos entre los bambini continúa. A nuestro regreso a Italia empezamos un trabajo con las primarias de Empoli; nos reunimos con las maestras para explicarles dónde está Chiapas, qué pasa allá, qué es una comunidad indígena y por qué están en rebeldía. Fue un encuentro maravilloso porque tanto los maestros como los miembros de la Coordinadora Toscana recorrimos durante dos meses todas las primarias de la región dándole a los niños un curso intensivo de zapatismo. Los chamaquitos hicieron dibujos para el intercambio y prepararon una obra de teatro que sus padres filmaron. Esta fue una iniciativa de ellos, en la que nosotros no participamos. En la obra escenifican la dignidad indígena y la lucha de los zapatistas; los pequeños aparecieron con paliacates y pasamontañas. Acabamos de llevar el video a San Juan de la Libertad. Entregamos el CD junto con una computadora con DVD y todo lo necesario para verlo.

"La segunda delegación organizada por la Coordinadora por la Lucha Zapatista llegó a Chiapas, a San Juan de la Libertad, en agosto de 2000. Esta vez vinieron estudiantes de secundaria y de preparatoria de la ciudad de Lucca y algunos miembros de Manitessa, donde destaca la labor de Aldo Zanchetta. Ellos, a su regreso, escribieron y publicaron un libro sobre sus experiencias titulado Chiapas, ¿por qué? En esa visita se formalizaron dos hermanamientos más: el del municipio autónomo Lucio Cabañas con la Provincia de Lucca y San Andrés Sankam'chen de los Pobres (antes San Andrés Larráinzar) con la ciudad de Livizzano. A las autoridades de Lucio Cabañas se les hizo entrega del dinero que les envió la Región Toscana para la construcción del edificio de su municipio autónomo. Nuestra delegación también trajo un financiamiento para la escuela secundaria de Oventic que ya está en obra negra; ya les falta poco para terminarla.

"Durante la marcha zapatista en marzo de 2001, vino a México Carlo Moscardini, alcalde de Lastra a Signa. Era su primera visita a este país y le entusiasmó tanto que buscó un encuentro con el comandante David del EZLN. De regreso en Italia, el alcalde Moscardini y la Coordinadora cocinaron un hermanamiento con el municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

"Se preparó una nueva delegación formada por miembros de la Coordinadora Toscana a la Lucha Zapatista, el alcalde Moscardini, de Lastra a Signa, con sus asesores Ricardo Fanfani, la alcaldesa de San Piero a Sieve, Alessia Ballini, y representando a la alcaldía de Empoli, Paola Sani.

"En cada reunión en México, siempre empezamos a hablar sobre las protestas en Génova, donde la policía le disparó a Carlo y, ya herido, le pasaron la patrulla por encima. Queremos que los indígenas sepan dónde vivimos, que no habitamos en el mejor de los mundos y que Europa no es un ejemplo a seguir; que también es un mundo feo donde no podemos protestar contra el G8 porque llega la policía, nos reprime e incluso llega a matar. Queremos dejar claro que nuestra lucha es la misma que tienen los zapatistas. Que nuestro trabajo de solidaridad es muy difícil, muy duro, sobre todo después de los aviones en Estados Unidos. Tenemos muchos problemas: el gobierno de Berlusconi es el más reaccionario; los centros sociales y el movimiento antiglobalización tenemos encima a la policía, igualito que los zapatistas. Mientras nuestra delegación estaba en México, la policía italiana arrestó a dos

de nuestros compañeros de manera arbitraria e injustificada, dizque buscando armas. Esa es nuestra realidad.

"Queremos que las personas de Empoli entiendan lo que está pasando en Chiapas y que el hermanamiento no sea sólo cosa de la alcaldía, de los burócratas, sino de todos.

-Platícanos sobre la delegación que estuvo en Chiapas.

-"La delegación llegó el pasado 24 de noviembre a San Juan de la Libertad. Trajimos material didáctico para la escuela, también una donación de la Región Toscana (se juntaron 20 mil dólares con las instancias oficiales; éste es el proyecto mayor, pero no el único). El grupo de rock Tamales de Chipil, dedicó un disco compacto a los indígenas; la grabación es fruto de una coproducción entre la Coordinadora Toscana y la alcaldía de Empoli. El dinero recaudado por la venta del disco se entregó a la comunidad. Hubo saludos a la bandera y se entonaron los himnos de México y el zapatista. Vinieron los discursos y un intercambio de regalos. Luego la comunidad presentó una obra de teatro, el tema fue los borrachos y las mujeres, todo en tzotzil.

"Llevamos dos piñatas llenas de dulces; luego tuvimos una reunión de trabajo con la cooperativa Mut Vitz que produce café y miel, y otra con la Cooperativa de Mujeres El Dinosaurio, compuesta por 200 mujeres de los municipios de San Juan de la Libertad y San Andrés de los Pobres. La reunión duró siete horas. Cuando terminamos las pláticas empezó el baile en nuestro honor. Todos bailamos; también bailó el alcalde.

Al día siguiente visitamos la secundaria de Oventic. Después visitamos el Consejo Autónomo de Flores Magón donde nos hermanamos. Allí vamos a financiar una pequeña clínica. El alcalde Carlo Moscardini de Lastra a Signa se comprometió a enviar un dinerito para terminar y echar a andar la clínica de la comunidad".

-¿Cómo es que lograron el apoyo de las alcaldías en estas andanzas?

-"A través de un intenso trabajo de información a cargo del Centro Social Intifada. Hicimos marchas, conciertos por Chiapas y así empezaron los contactos con las autoridades de Empoli.

"Hubo un debate en el interior de la alcaldía y del partido político al que pertenece, Democracia de Sinistra (DS), el viejo Partido Comunista. El ala más a la izquierda del DS vio una oportunidad para hacer retornar el internacionalismo. En Italia, como en todo Europa, no existe más una solidaridad política, sino una solidaridad cristiana, católica. El dinero que va al Tercer Mundo es para ayuda humanitaria. Actualmente los zapatistas son el único punto de referencia para la solidaridad política.

"Cuando el levantamiento del EZLN en 1994, los primeros en reaccionar en Italia fueron los centros sociales y la extrema izquierda. La izquierda de partido no dijo nada; sus jefes, los parlamentarios y demás, necesitaron siete años para hacer solidaridad política con los zapatistas. La izquierda parlamentaria hizo muchos chistes sobre el sub Marcos y los zapatistas porque no entendían la importancia del levantamiento.

"Carlo Moscardini, el alcalde de Lastra a Signa, tiene mucha experiencia con la solidaridad. En Cuba hizo un proyecto de turismo binacional recorriendo la ruta del Che Guevara en la Sierra Maestra a caballo. Esto se organizó junto con el Ministerio de Turismo cubano. Antes de venir a Chiapas recorrió a caballo y a camello Saharai, un pueblo que lucha por su independencia de Marruecos. Allá viajaron Moscardini y el presidente de la Región Toscana, Carlo Martini; hicieron una cabalgata por el desierto, con 50°C, durante una semana; Moscardini tiene 60 años y el viaje lo agotó, pero aún así, juntó fuerzas y vino a Chiapas".

En aquella reunión con Mut Vitz y la cooperativa de mujeres, el alcalde de Lastra a Signa se quedó dormido en la mesa de trabajo. Armando lo sacudió para que no perdiera detalle del histórico encuentro. Esa noche, cuando ya todos estaban profundamente dormidos, un ruido estremecedor rompió el silencio absoluto que reinaba: el alcalde se había caído de la hamaca, era primerizo en el arte de dormir colgando.*

La Jornada 5 de febrero de 2002

Proponen en el CNI movilizaciones para impulsar resoluciones favorables de la Suprema Corte

ROSA ROJAS

Integrantes de la regional centro del Congreso Nacional Indígena (CNI), de 10 estados, plantearon ayer la realización de una serie de movilizaciones para impulsar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia que analizan las controversias constitucionales contra la reforma en materia indígena "se acerquen más a lo que son los derechos de los pueblos indios". Se propuso que las movilizaciones se desarrollen los días que se fijen para las audiencias respectivas.

Representantes de cuatro municipios morelenses que interpusieron controversias ante la SCJN (Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla y Tepalcingo) se quejaron de que "el trámite va lento", y que esa instancia les había indicado que habría una resolución a finales de enero, lo que no ocurrió.

Se advirtió que de los amparos que comunidades indígenas de Michoacán interpusieron contra la reforma están listos para sentencia los de Nurio y Urapicho, del municipio de Paracho, que están en el juzgado sexto de distrito en materia administrativa de Uruapan. Se indicó que "si la juez a cargo actúa conforme a derecho tendrá que dar resolución favorable a los amparos, respetando la Constitución", pero se llamó a estar alerta, "pues el fallo podría ser desfavorable, porque esa juez rechazó el amparo de la comunidad de Ocumicho, municipio de Charapan, argumentando que se quería destrozar la Constitución".

En el caso de Ocumicho se interpuso recurso de revisión y se espera que lo admitan, como en el amparo de la comunidad de Calzontzin, que rechazaron con ese mismo argumento, pero se pidió la revisión y se dio la suspensión.

Están pendientes también -entre otros- los de las comunidades de Cheranatzicurin y Quinceo, Cuanajo, Santa Clara del Cobre y Zirahuén, así como la controversia constitucional interpuesta por el municipio de Paracho.

Se subrayó, sin embargo, que a la par de la estrategia legal se sigue promoviendo mediante talleres en las comunidades el Decreto Purépecha de Autonomía "como respuesta política a esa ley impugnada".

Por su parte, la Alianza de Pueblos y Ejidos del Valle de Anáhuac informó que en el caso de los amparos interpuestos por las comunidades de Milpa Alta, San Nicolás Totolapan, San Mateo Tlaltenango y San Pedro Atlapulco se fijó la audiencia constitucional para el próximo 7 de febrero.

En la reunión del CNI-regional centro, celebrada en Milpa Alta, se acordó, por otra parte, demandar al gobierno del Distrito Federal el esclarecimiento del asesinato del representante de bienes comunales de Villa Milpa Alta, Ramiro Taboada. "Se tiene la certeza de que el

supuesto atropellamiento que habría sufrido no fue accidental, sino intencional", se indicó. A la reunión asistieron más de 80 representantes de comunidades y organizaciones indígenas de Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Querétaro y Colima.

Entre los representantes de organizaciones no indígenas estaba un enviado de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos de Barcelona, España.

Durante la asamblea, el Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas de Querétaro exigió la liberación de los presos políticos Sergio Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles, encarcelados junto con otras personas que ya fueron liberadas durante el incidente suscitado en medio de una protesta popular con un autobús del convoy presidencial, en 1998.

Por su parte el comisario ejidal de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, estado de México, Rey Pérez Martínez, informó del conflicto que mantiene este núcleo agrario con la población de Villa Guerrero por el agua de los manantiales ejidales. Indicó que el ejido solicitó un amparo contra la concesión de sus aguas por parte de la Comisión Nacional del Agua a Villa Guerrero, y como las autoridades de esa población se negaron a negociar el agua con el ejido, éste decidió cortarles el suministro el 23 de diciembre. "No les queremos quitar todo, estamos dispuestos a compartir el agua, pero los recursos naturales son de Tlanixco y se nos deben respetar, nosotros necesitamos agua para nuestros 12 mil habitantes y los de Villa Guerrero deben instalar una bomba y pagar la electricidad para el suministro de Tlanixco, pero ellos dijeron que no nos van a dar nada", apuntó Pérez Martínez.

Amador Cortés Robledo, del Consejo Guerrerense 500 años, informó que debido a las movilizaciones contra la aprobación de la "ley indígena Bartlett-Fernández de Cevallos", hay cerca de 300 órdenes de aprehensión, por supuestos delitos del fuero federal, contra luchadores sociales integrados en la Convergencia estatal de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Sindicales y Estudiantiles. Indicó que la organización determinó movilizarse para exigir la cancelación de dichas órdenes de aprehensión. Se informó que entre las movilizaciones programadas está la entrega, el 15 de febrero, de más de 60 mil firmas en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo en el Distrito Federal, para exigir el cumplimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales; el 16 de febrero se llevará a cabo un festival político cultural en el Zócalo capitalino para conmemorar la firma de los acuerdos de San Andrés. Los días 23 y 24 de febrero se efectuará una reunión nacional de comunidades indígenas para dar seguimiento a la situación de las controversias constitucionales y los amparos interpuestos contra la reforma constitucional en materia indígena.

La Jornada 16 de febrero de 2002

Comienza campaña nacional en favor de los pueblos indios

ENRIQUE MENDEZ

A seis años de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal firmaron en San Andrés Larráinzar los primeros acuerdos para el proceso de pacificación, 25 organizaciones indígenas y simpatizantes del movimiento armado comenzarán hoy en el Zócalo capitalino la Campaña Nacional de Lucha y Resistencia por la Justicia y la Paz para los Pueblos Indígenas de México.

La campaña arranca mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúan revisándose 329 controversias constitucionales que se presentaron contra la reforma a la Constitución aprobada por el Congreso, que los pueblos se niegan a asumir, y cuando continúa la tensión en comunidades de Chiapas, así como la guerra de baja intensidad. El contenido de la campaña se presentó ayer en conferencia con la prensa, en la cual se precisó que habrá 15 jornadas para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y conmemorar el primer aniversario de la participación de la delegación del EZLN en el Congreso Nacional Indígena de Nurío, Michoacán.

Se incluyen dos días de resistencia civil ante la Cumbre Mundial para la Financiación del Desarrollo, en Monterrey, Nuevo León, a finales de marzo, cuando viajarán a esa ciudad jefes de Estado de todo el mundo.

José Luis Castro, de la organización Artesanos Indígenas del Distrito Federal, y Damián Camacho Guzmán, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, informaron que además de las controversias, se presentarán ante la Corte las más de 62 mil firmas que se recabaron en rechazo a la reforma aprobada por el Congreso en materia de derechos y cultura indígenas.

Asimismo, se informó que el CNI acordó fortalecer su trabajo de organización para que, cuando la Corte emita su fallo sobre las controversias, pueda definir su estrategia jurídica, en caso de que refrende la constitucionalidad de los cambios a la ley.

Por lo pronto, durante la conferencia se llamó a la Corte para que "actúe con congruencia" y determine que la reforma es inconstitucional, porque se violaron etapas del procedimiento legislativo.

Castro y Camacho Guzmán afirmaron que a 10 meses de votada la iniciativa, que no recogió el espíritu de los acuerdos de San Andrés, aún no disminuye la tensión en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ante una militarización creciente y una agresión sistemática a las comunidades indígenas.

Afirmaron que el hecho de que se aprobara la reforma no abrió la posibilidad para el reinicio del diálogo y mucho menos propició la mejora en las condiciones de vida de los indígenas, que todos los días sufren "la amenaza ante la presencia de militares" en sus comunidades.

Observadores internacionales en Chiapas

También se informó de la visita de 100 integrantes de la Comisión Civil de Observación Internacional y de Derechos Civiles, quienes viajarán a Chiapas el próximo martes, donde permanecerán hasta principios de marzo para entrevistarse con las comunidades.

A su regreso, redactarán un informe a partir de una radiografía de la situación en el estado, y presentarán un reporte a la ONU y al Parlamento Europeo.

El inicio de la Campaña Nacional de Lucha y Resistencia por la Justicia y la Paz coincide con la fecha en que hace seis años se firmaron los primeros acuerdos del proceso de pacificación, relativos a los derechos y la cultura indígenas, que se integraron al Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad.

En aquella ocasión, el *comandante David* comentó: "Este es un acuerdo pequeño, no nos dejemos engañar que si se ha firmado ya es un acuerdo de paz".

La Jornada 17 de febrero de 2002

Los ojos del mundo en México
Tania Molina Ramirez

Pese a las promesas oficiales, la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo tema de atención para organismos internacionales de toda especie. Uno a uno, han constatado que muchas de las ofertas del gobierno del "cambio" están lejos de hacerse realidad. En las próximas semanas toca el turno a un centenar de ciudadanos de 14 naciones que visitarán cárceles y comunidades indígenas chiapanecas, además de entrevistarse con funcionarios públicos y representantes de organismos civiles. Es su tercera vez en México, la primera en tiempos foxistas

"¡Han soltado al general Gallardo!", exclama el español Sigfrido Miralles de Argila. "La vez pasada que venimos, unos días antes de que llegáramos, el rector Francisco Barnés renunció", recuerda, y bromea: "Cada vez que venimos pasa algo".

Sigfrido, un jubilado técnico de mantenimiento de una compañía Telefónica, forma parte de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), la cual realizará tareas de observación en el país del 16 de febrero al 3 de marzo.

Si bien los dos acontecimientos que menciona Sigfrido simplemente coincidieron con el arribo de los observadores, durante la primera misión de observación -motivada por la indignación y consternación que causó en el exterior la masacre de Acteal y por la desconfianza en la información oficial- hubo una víctima fatal, esta sí consecuencia directa de la presencia de la Comisión: el 21 de febrero de 1998, un día después de haber entregado a la Comisión testimonios y denuncias de los desplazados, José Tila López García, de Yosijá, Chiapas, fue asesinado por un grupo de paramilitares.

"Atrás quedaron las prácticas autoritarias, dando lugar a una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, (la cual) se finca en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, a las libertades y a los derechos fundamentales de los mexicanos," dijo Vicente Fox el lunes pasado, durante la visita oficial del canciller alemán Gerhard Schröder.

A pesar de las optimistas palabras del Presidente, para los organismos de derechos humanos hay muchos asuntos por resolver: el asesinato de Digna Ochoa, la suspensión del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, la reforma indígena con la que los pueblos indios han mostrado su inconformidad, la militarización y paramilitarización en Chiapas, el caso del general Francisco Gallardo, los desaparecidos, entre otros. Estos serán algunos de los temas que la Comisión se propone documentar.

Los más de 100 observadores provenientes de 14 países, incluso Groenlandia, forman un amplio abanico: estudiantes, trabajadores, doctores, antropólogos, arquitectos, activistas políticos, luchadores sociales, poetas, cineastas. Para muchos, es la primera vez que vienen, como el poeta y cineasta Richard Desjardins, ampliamente conocido en Canadá por el trabajo que realizó durante 25 años con indígenas de aquel país.

La noticia de la masacre en Acteal corrió como pólvora en el internet. Todas las páginas electrónicas de grupos civiles de derechos humanos, desde Human Rights Watch hasta los comités de solidaridad con Chiapas, traían la alerta, en todos los foros se discutía cuáles podrían ser los pasos a seguir. "Circulaban muchos mensajes, todos opinábamos, ahí fue donde surgió la idea de que fuéramos a México a realizar una visita de observación", cuenta el investigador social canadiense Claude Rioux en un perfecto español, gracias a sus largas

estancias en Guatemala y México, donde trabajó en los campamentos de refugiados guatemaltecos.

Una delegación del Parlamento Europeo había realizado un informe sobre derechos humanos en el marco de la firma del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. A principios de diciembre se hizo público, "después vino la matanza y nuestra indignación fue mayúscula, nuestra desconfianza (de la información oficial) hizo que nos planteáramos hacer un informe que no obedeciera a ningún interés", narra Iñaki García, uno de los principales promotores de la CCIODH.

En poco más de un mes, la recién formada Comisión ya tenía preparado el viaje. Y, recuerda Claude, fue una gran sorpresa llegar a México el 15 de febrero de 1998 y descubrir que no eran 50, como calculaban, sino 210 los sindicalistas, oenegeros, universitarios, políticos, activistas sociales, religiosos y periodistas provenientes de 11 países que arribaron para formar parte de la misión.

La Comisión se enfrentó a una campaña de desinformación y xenofobia en los medios, cuenta Claude. Se les acusaba de ser parciales, de apoyar al EZLN, y hasta de estar interesados en los recursos naturales de Chiapas.

"Hay que admitir que no somos neutrales, no existe la neutralidad en un conflicto así, somos gente metida en las luchas sociales, de ahí venimos. Estamos a favor de las demandas zapatistas, sin embargo, no apoyamos al EZLN, ni sus estrategias, sino a la población civil", explica Claude.

Tras dos semanas de intensa actividad -entrevistas a funcionarios públicos y a 110 representantes comunitarios, un extenso recorrido por las comunidades chiapanecas, y visitas a la cárcel de Cerro Hueco, y a los campamentos de refugiados- declararon que "la realidad que se vive en el estado de Chiapas es más dramática de lo que imaginábamos." Y, en un extenso y detallado informe concluían que "la situación de los derechos humanos está en un gravísimo deterioro". Recomendaban "el cumplimiento inmediato e íntegro de los Acuerdos de San Andrés y continuación del proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal; el respeto al proyecto de iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA; poner fin a la militarización y paramilitarización; asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad; amnistía inmediata a los presos políticos; retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con la indemnización por los daños y perjuicios sufridos; la designación de un relator especial de la ONU para México; el establecimiento de un mecanismo por parte de la Unión Europea de seguimiento de la "cláusula democrática y de derechos humanos", entre otras. Recomendaciones que la Comisión constató en su segunda visita en noviembre de 1999, seguían sin solución.

Los informes de la CCIODH fueron entregados a las comunidades chiapanecas visitadas, al gobierno de México, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mary Robinson, al Parlamento Europeo, a los ministerios de Asuntos Exteriores y los parlamentos locales en varios países europeos y en Canadá. Los integrantes de la Comisión también difundieron la información en sus países a través de pláticas y de los medios.

Hoy, las circunstancias son distintas a la última vez que pisaron suelo mexicano: el PRI fue derrocado en las elecciones presidenciales y para gobernador chiapaneco, se aprobó una reforma indígena -pero que no cuenta con la aprobación de los pueblos indígenas-, el gobierno foxista ordenó el retiro de siete retenes en Chiapas -aunque aún hay más de 150. El grupo de 104 observadores recién llegados verificarán la realidad del conflicto chiapaneco no a través de entrevistas con funcionarios públicos, representantes de ONG y, sobre todo,

con la visita a las comunidades indígenas en aquella entidad. Luego darán a conocer al mundo lo observado.

La Jornada 19 de febrero de 2002

Sin respuesta, solicitud de ONG para hablar con funcionarios

VICTOR BALLINAS

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que inició el pasado sábado su misión de trabajo en el Distrito Federal, anunció que del 21 al 28 de este mes estará en Chiapas, donde visitará 50 comunidades indígenas y se entrevistará con presos, organizaciones paramilitares, organismos no gubernamentales, dirigentes de comunidades, e incluso espera reunirse con la comandancia del EZLN.

En conferencia de prensa, dicha comisión informó que ha solicitado entrevistas con el procurador general de la República, con los secretarios de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores y con el presidente de la Suprema Corte, sin que hasta el momento haya tenido respuesta. Ayer, a las 14 horas, los integrantes del organismo se entrevistaron con el procurador capitalino, Bernardo Bátiz.

Claude Riox, Helena Raux y Gonzalo Franco informaron que esta agrupación se creó en febrero de 1998, a raíz de la indignación mundial que desató la masacre de Ac-teal en la opinión pública internacional. Un año después, se organizó la segunda comisión y en esta tercera visita se pretende dar seguimiento a la observación de los derechos humanos, principalmente en Chiapas.

Son 104 observadores, procedentes de 14 países, los que iniciaron el sábado su programa de actividades en el Distrito Federal, y a partir del 21 y hasta el 28 estarán en Chiapas. Expusieron que no pueden hablar de la situación actual de los derechos humanos en el país, pues el objetivo es constatar en Chiapas, Tabasco, Querétaro y Distrito Federal cómo se encuentra la protección a estas garantías, pero lo que sí quisieran es que México estuviera a la vanguardia en esta materia.

Informaron que el primero de marzo se entrevistarán con el general Gallardo y su abogado, y sostendrán reuniones con el Centro Miguel Agustín Pro, además de que durante la entrevista de ayer por la tarde con el procurador Bátiz, le expondrían su preocupación por las amenazas a defensores a derechos humanos y por el asesinato de Digna Ochoa.

Señalaron que es de interés particular para ellos hablar con funcionarios del gobierno para que les expongan los programas en favor de los derechos humanos, y sobre todo se les dé una explicación de la situación en Chiapas.

La República 19 de febrero de 2002

Comisión Internacional de Derechos Humanos, aquí

MEXICO, D.F., febrero 18 (UNIVERSAL).- Por tercera ocasión se encuentran en México los miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, quienes harán un recorrido por la zona de conflicto en Chiapas para comprobar que se ha mejorado la protección a estas garantías.

Los activistas sostuvieron que los derechos humanos se tienen que defender independientemente de las fronteras entre países y en México están dispuestos a buscar que se cumpla con esta garantía.

Ciudadanos de diferentes nacionalidades ya solicitaron un encuentro con el presidente Vicente Fox y otros funcionarios locales y federales de quienes se espera hablar sobre este tema.

La citada comisión se creó en 1998, en el mes de febrero, a raíz de la masacre de Acteal por lo que se agruparon con el objetivo de visitar México y verificar la protección a los derechos fundamentales.

Serán 104 observadores que vinieron de 14 países y tendrá distintas actividades hasta el 28 de febrero y será en marzo cuando presenten su informe final.

Dentro de sus actividades también se comprende la visita a presos recluidos en cinco penales y tendrán contacto con diferentes organizaciones no gubernamentales del país.

De acuerdo con la última visita que hicieron pudieron verificar que la situación de los derechos humanos en México se había agravado con relación al año de 1998, por lo que esperan que con este nuevo gobierno las circunstancias hayan cambiado.

Más allá de las críticas vertidas en contra de ellos por intervenir en asuntos de carácter nacional, los activistas argumentaron que trabajarán por la defensa de los derechos humanos y si estos no se respetan en México se lo harán saber, a través de una recomendación, al gobierno federal.

El Universal 19 de febrero de 2002

Niega gobierno colaboración: activistas

Sergio Javier Jiménez

Por tercera ocasión se encuentran en México los miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, quienes harán un recorrido por la zona de conflicto en Chiapas para comprobar que se ha mejorado la protección a estas garantías en aquella entidad.

En entrevista Sigfrido Miralles, miembro de la organización, indicó que a diferencia de los gobiernos priístas, la administración del presidente Vicente Fox no ha dado muchas muestras de querer colaborar con ellos.

Esto debido a que de las 13 entrevistas que han solicitado con diversos funcionarios sólo les han respondido cinco, cuando en ocasiones anteriores, las administraciones a cargo del PRI los han recibido.

Durante esta visita que harán a Chiapas a partir del próximo día 21 los defensores de los derechos humanos quienes se agruparon a raíz de la matanza de Acteal conversarán con organizaciones civiles y funcionarios estatales y recorrerán unas 50 comunidades.

En conferencia de prensa sostuvieron que los derechos humanos se tienen que defender independientemente de las fronteras entre países y en México están dispuestos a buscar que se cumpla con esta garantía.

Los ciudadanos de diferentes nacionalidades ya solicitaron un encuentro con el Presidente y otros funcionarios locales y federales de quienes se espera hablar sobre este tema. Serán 104 observadores de 14 países los que hagan el recorrido y será en marzo cuando presenten su informe final.

Dentro de sus actividades también se comprende la visita a presos reclusos en cinco penales y tendrán contacto con diferentes organizaciones no gubernamentales del país.

De acuerdo con la última visita que hicieron pudieron verificar que la situación de los derechos humanos en México se había agravado en relación con el año de 1998, por lo que esperan que con este nuevo gobierno las circunstancias hayan cambiado.

Más allá de las críticas vertidas en contra de ellos por intervenir en asuntos de carácter nacional, los activistas argumentaron que trabajarán por la defensa de los derechos humanos y si estos no se respetan en México se lo harán saber, en una recomendación, al gobierno federal.

La Jornada 20 de febrero de 2002

Respuesta en *cascada* a comisión internacional de derechos humanos

VICTOR BALLINAS

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) informó que ayer recibió respuesta "en cascada" de las ocho dependencias del gobierno federal con cuyos funcionarios había solicitado entrevistarse.

La CCIODH precisó que la Procuraduría General de la República (PGR) era una de las ocho dependencias que faltaban de respondernos, y "lo hizo ayer, pero no nos enteramos sino hasta después de que terminó la conferencia de prensa en la que señalamos que esa institución no nos había dado aún respuesta".

Sin embargo, aclararon los integrantes de la CCIODH, "solicitamos la entrevista desde el 22 de enero pasado y la respuesta se recibió por fax hasta ayer".

En igual caso, abundaron, estaba la Secretaría de la Defensa Nacional. "Tampoco había respondido nuestra petición, pero ayer por la tarde nos comunicó que no está facultada para atender los asuntos que le planteamos. Nos pidió que nos dirijamos a la cancillería".

La PGR buscó ayer por la mañana a la CCIODH para programar una reunión y les informó que "el señor Mario I. Alvarez Ledesa, director de Protección a los Derechos Humanos, será quien los atenderá a las 13 horas". Ayer se entrevistaron con el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, y también con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marie Claire Acosta.

La SRE, explicaron, era una de las dependencias que "había respondido en tiempo a nuestra petición de entrevista, pero las que no lo habían hecho, ayer respondieron de inmediato. Para nuestra sorpresa, la única instancia que no ha contestado es la Presidencia de la República".

Hoy serán recibidos a las 14 horas en la Secretaría de Gobernación por Ricardo Sepúlveda, quien tiene a su cargo el área de derechos humanos de la dependencia. Además tienen cita en la SCJN a las once de la mañana y por la tarde viajarán a Chiapas.

Señala la PGR que giró oficio a la CCIODH

Señora directora:

El día de ayer, en la página 6 de este diario, apareció una nota firmada por Víctor Ballinas en relación con la visita que hace a nuestro país la Comisión Civil Internacional de Observación (CCIO). En dicha nota se señala que la citada organización no gubernamental "... ha solicitado entrevistas con el procurador general de la República, con los secretarios de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores y con el presidente de la Suprema Corte, sin que hasta el momento haya tenido respuesta".

Por lo que toca a la PGR, la anterior afirmación es errónea. Es menester precisar que a las 10:26 horas del 18 de febrero del año en curso, la citada organización recibió, vía fax, el oficio PGR/075/2002, suscrito por el licenciado Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República. Circunstancia, ésta, que ha sido confirmada por la mencionada comisión.

En el oficio referido se detalla que tanto el licenciado Martín D. Salido Orcillo como el doctor Mario I. Alvarez Ledesma, delegado estatal en Chiapas y director general de Protección a los Derechos Humanos, respectivamente, serán los servidores públicos de esta institución encargados de atender a los miembros de la comisión. Por cierto, es oportuno decir que el día de ayer se estableció comunicación telefónica con la organización de referencia para agendar la visita de los mismos a la PGR, la cual se llevará cabo hoy a las 13 horas en las oficinas de esta dirección general a mi cargo.

En tal virtud, la PGR reitera su compromiso de continuar atendiendo las peticiones formuladas por los organismos de la sociedad civil. Se anexa copia del oficio PGR/075/002.

Mario I. Alvarez Ledesma, director general de Protección a los Derechos Humanos de la PGR

Respuesta del reportero

Señora directora:

En relación con la aclaración de Mario I. Alvarez Ledesma, director general de Protección a los Derechos Humanos de la PGR, respecto a que ésta sí comunicó a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) la fecha de entrevista, y por tanto "es erróneo lo publicado ayer en este diario", quiero precisar que la información publicada se proporcionó en la conferencia de prensa a que citó dicha comisión.

Ayer la CCIODH informó que "en efecto, la PGR sí nos informó que seríamos recibidos, pero nos enteramos de ello hasta después de concluida la conferencia en la que nosotros dimos a conocer las dependencias que no nos habían respondido".

La comisión agrega: "le pedimos la cita a la PGR desde el 22 de enero pasado y no fue sino hasta ayer que nos dio respuesta, misma que recibimos por la tarde, y la conferencia de prensa referida fue al mediodía. Qué bueno que después de señalar a las dependencias que nos nos respondían, ayer nos contestaron la mayoría de ellas".

Víctor Ballinas

La Jornada 21 de febrero de 2002

Precisiones de la PGR

Señora directora:

Sin intención de entrar en un debate epistolar, pero sí en cambio para dejar en claro a la ciudadanía las acciones puntuales que en materia de derechos humanos realiza la PGR, respetuosamente solicito a usted tenga a bien publicar la siguiente aclaración:

1. La PGR remitió vía fax oficio de contestación a la solicitud de audiencia de la Comisión Civil Internacional de Observación el pasado 18 de febrero; es decir, con anterioridad a la conferencia de prensa en la cual la citada Comisión refirió que no había obtenido respuesta a su solicitud de entrevista con diversos funcionarios federales, entre ellos, el procurador general.

2. Miembros de esa comisión reconocieron que no habían revisado con oportunidad los documentos recibidos y que por ello no contaron con la información enviada por la PGR al momento de la citada conferencia.

3. La PGR enfatiza que su labor en el ámbito de protección y promoción de los derechos humanos se lleva a cabo con base en los parámetros que exige la ley y no en función de reacciones a notas periodísticas. Lo anterior viene a colación por lo señalado por el reportero Víctor Ballinas en El Correo Ilustrado sobre la mencionada comisión civil: "... Qué bueno que después de señalar a las dependencias que no nos respondían, ayer nos contestaron la mayoría de ellas".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida consideración.

Mario I. Alvarez Ledesma, director general de Protección a los Derechos Humanos de la PGR

"Error", haber presentado la iniciativa indígena de Cocopa, dicen algunos de sus integrantes

ANDREA BECERRIL

Frente a las críticas formuladas por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), quienes consideraron que los diputados se equivocaron al haber presentado de nueva cuenta la iniciativa indígena, ya que ello no abona a la paz, el presidente en turno del organismo, José Narro Céspedes, respondió que en el inmovilismo y la espera permanente no van a lograr que se reanude el diálogo en Chiapas.

La discusión resultó fuerte y Narro se quedó prácticamente solo en su defensa de la llamada *ley Cocopa*, ya que incluso los senadores del PRD Demetrio Sodi y Rutilio Escandón resaltaron que fue un error la presentación de la iniciativa indígena, sin consenso con todas las fuerzas políticas y sin esperar a que la Suprema Corte decida en torno a los recursos legales presentados contra la reforma.

La senadora panista Luisa María Calderón reiteró durante esa reunión interna las críticas hacia el PRD, por considerar que los perredistas aprovecharon que el pasado lunes llevaron nuevamente al Congreso la iniciativa de la Cocopa "para atacar a uno de los contrincantes

por la dirección de ese partido". La controversia fue tal que los legisladores determinaron que no habrá una postura de la comisión en torno a ese tema.

Molestia y quejas

Los ánimos estaban tan encontrados que al inicio de la sesión plenaria algunos legisladores -como el senador Sodi- se quejaron porque Narro Céspedes no les había notificado sobre la visita de integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observancia por los Derechos Humanos, ONG en la que participan representantes de 14 países. Al final de la discusión sobre la *ley Cocopa*, y luego que desahogaron la agenda del día, recibieron a los visitantes.

Al final, en entrevista, Sodi de la Tijera dijo que Narro Céspedes está en su derecho de presentar la iniciativa de la Cocopa, "y nosotros de opinar si ello es positivo o negativo". Agregó que el tema se discutió y sólo se acordó que la comisión no tendrá una postura al respecto.

El senador perredista consideró que la determinación de Narro y otros diputados "no ayuda para nada a la paz". Explicó que si la Suprema Corte decide que la ley indígena es inconstitucional, se justifica reiniciar el procedimiento, pero si desecha los recursos legales que se han interpuesto, entonces lo que se necesitará es reformar esa legislación vigente.

Lo lógico, dijo, es que los diputados se hubieran esperado, además de que "quienes tenemos experiencia parlamentaria sabemos que primero se llega a acuerdos y luego se presentan las iniciativas".

Igualmente, el senador perredista por Chiapas, Rutilio Escandón, consideró que se apresuraron los diputados. "Debió antes hacerse un esfuerzo de consenso y en una actitud sensata llamar a todos los legisladores, porque nosotros no fuimos convocados y el intento puede ser estéril".

La panista Luisa María Calderón y la priísta Arely Madrid Tovilla comentaron a su vez que no hay posibilidades reales de volver a legislar la iniciativa de Cocopa.

El diputado del PT, Narro Céspedes, quien participa desde la primera Cocopa y es el presidente en turno, reivindicó su postura: "Participé en la presentación de la iniciativa indígena porque creo necesario reactivar este asunto, que nos demos una nueva oportunidad para la paz y que pensemos que ningún esfuerzo es menor o pequeño para lograr que se reinstale el diálogo entre las partes en el conflicto de Chiapas".

Frente a las críticas de los demás legisladores integrantes de la comisión, Narro Céspedes hizo notar que la función de ese órgano de coadyuvancia es atender las tres señales o condiciones que el EZLN planteó para volver a la mesa de negociaciones, y que son el asunto de los presuntos zapatistas aún presos, desmilitarización y ley indígena.

El legislador petista resaltó que fue precisamente la aprobación de una reforma indígena insuficiente lo que motivó la suspensión del diálogo entre el Ejército Zapatista y el gobierno federal; por ello, un grupo de diputados decidió presentar nuevamente la iniciativa de la Cocopa, elaborada en 1996.

Sobre las quejas de los otros legisladores en el sentido de que no hubo consenso, Narro dijo que son 168 diputados los que firmaron la iniciativa y se buscará que un mayor número lo haga. Pero, aclaró, "de lo que se trata es de poner otra vez el tema en la mesa de discusión y de construir una estrategia hacia el consenso".

Sólo que ello, dijo, "no se va a dar en el inmovilismo, en la inactividad, en la espera permanente". Está además claro, precisó, que el Congreso no puede pasar por alto que hay sectores muy importantes que están a favor de que se legisle la iniciativa de la Cocopa. Al final informó que acordaron que una comisión viaje a Chiapas la próxima semana, para entrevistarse con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y con otros actores del conflicto, además de visitar la zona de influencia zapatista.

ONG internacional viajará a la zona de conflicto

Por su parte, Claude Rioux, de la Comisión Civil Internacional de Observancia por los Derechos Humanos, comentó que fueron recibidos durante media hora por un grupo de legisladores, a quienes pidieron información sobre la situación que guarda el conflicto zapatista.

Los activistas viajaron por la tarde al estado de Chiapas, ya que harán una evaluación de cómo ha evolucionado el movimiento durante el gobierno de Vicente Fox.

El Universal 21 de febrero de 2002

Observarán activistas la situación en Chiapas

Fredy Martín Pérez/Corresponsal

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.— La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos —integrada por activistas italianos, franceses y españoles—, que hoy jueves inicia una visita a Chiapas, recibirá de funcionarios del gobierno estatal informes sobre las acciones que han emprendido en los últimos años para proteger las garantías individuales de indígenas y campesinos.

Y es que según el secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa González, el gobierno estatal ha mantenido "contacto directo", desde el último año, con organismos civiles que trabajan en la protección a los derechos humanos.

Zebadúa González adelantó recientemente un informe ante organismos de derechos humanos de Estados Unidos, algunos de estos con presencia en la entidad, sobre la situación que prevalece en Chiapas, desde hace un año que arribó al poder Pablo Salazar Mendiguchía.

El secretario de Gobierno, a invitación de diversas organizaciones civiles encabezadas por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), dialogó durante dos días con personal de Human Rights Watch, del Centro para la Justicia y el Derechos Internacional, la Red de Solidaridad con México, la Unitarian Universalist, la Servicet Committe y otras organizaciones de tipo religioso que tiene presencia en el país y particularmente en Chiapas. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos recorrerán varias comunidades de las regiones Altos, Fronteriza, Selva y Norte.

La Jornada 22 de febrero de 2002

Envía gobierno de Chiapas policías al municipio de Tila

JUAN BALBOA, HELIO ENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 21 de febrero. El gobierno del estado informó que aceptó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de otorgar medidas de seguridad a tres indígenas presuntamente amenazados por integrantes de Paz y Justicia.

Asimismo, dijo que desde la semana pasada movilizó a policías de Seguridad Pública hacia el norteño municipio de Tila, "para salvaguardar la estabilidad de la región", a raíz de la detención del dirigente de aquella organización, considerada paramilitar.

El secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa González, precisó que las medidas precautorias se adoptaron para salvaguardar la integridad física de Margarita Martínez, Jaime Jiménez y Rafael Martínez, habitantes de El Limar, lugar de nacimiento de Diego Vázquez Pérez, dirigente de Paz y Justicia preso en el penal de Cerro Hueco desde la semana pasada.

En tanto, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) inició su tercera visita al estado, con una conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, en la que afirmó que las reformas sobre derechos y cultura indígenas aprobadas en abril pasado por el Congreso de la Unión constituyen "un duro golpe al diálogo y consecuentemente a la paz".

Los voceros del grupo, integrado por 104 personas de 14 países, dijeron que la suspensión del diálogo entre el gobierno y el EZLN afecta la situación de los derechos humanos.

En otro orden, unas 50 organizaciones humanitarias internacionales exigieron al gobierno estatal libere a cinco indígenas del denominado municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón, quienes se encuentran bajo arraigo domiciliario por su presunta participación en un asalto.

Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura y Human Rights Watch, entre otras, enviaron cartas al gobierno estatal en las cuales piden la libertad de Manuel Cruz Méndez, Antonio, Andrés y Miguel Gómez Luna, así como Mariano Ruiz Hernández.

La Jornada 23 de febrero de 2002

El gobierno, sin voluntad de paz, expresan Las Abejas a 50 meses del ataque

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, chis., 22 de febrero. Más de mil indígenas de diversas comunidades de Chenalhó participaron hoy en la ceremonia religiosa para recordar a los 45 tzotziles asesinados en Acteal hace 50 meses.

"Al cumplirse hoy 50 meses de la matanza, recordamos la memoria de los 45 mártires para que su sangre que se derramó no quede en el olvido", expresó la organización civil Las Abejas, a la cual pertenecían las víctimas, en un comunicado de prensa.

"Estamos aquí para recordar que los mártires murieron por una vida digna y por una paz con justicia", señaló la agrupación, y añadió: "Por eso hoy seguimos buscando caminos de dignidad y justicia para lograr una paz verdadera.

En la ceremonia, efectuada en la comunidad de Acteal, donde están enterrados los muertos, fue leído el comunicado en el cual la agrupación Las Abejas reiteró que en Chiapas y en el país "vemos que el camino de la paz y la justicia están atrapados; prueba de ello es que la

semana pasada se cumplieron seis años de la firma de los acuerdos de San Andrés y no se han cumplido".

Agregó: "Otra manifestación de que no hay voluntad del gobierno para alcanzar la paz es que sigue la presencia de los paramilitares en nuestra zona y se fortalece la presencia militar con el objetivo de brindar seguridad a los inversionistas con motivo del Plan Puebla-Panamá".

La misa para recordar a los 45 muertos fue oficiada -como cada día 22 de mes- por el sacerdote José Carmelo Jiménez, uno de los dos párracos de Chenalhó. A los más de mil indígenas que participaron en la celebración se unieron varios activistas de diversos países.

Mientras, los integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que ayer comenzó su tercera visita a Chiapas para conocer la situación de esas garantías, empezaron hoy un recorrido por varios puntos del estado.

La noche del jueves, en conferencia de prensa, el grupo afirmó que las reformas sobre derechos y cultura indígenas aprobadas en abril pasado por el Congreso de la Unión constituyen "un duro golpe al diálogo y consecuentemente a la paz".

Los voceros de la comisión, integrada por 104 personas de 14 países, estimaron que la suspensión del diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional afecta la situación de los derechos humanos.

La Jornada 25 de febrero de 2002

Agreden presuntos paramilitares vehículo de observadores

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, CChis., 24 de febrero. Presuntos paramilitares de Altamirano agredieron el vehículo en que viajaba un grupo de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que el pasado día 22 comenzó recorridos por comunidades de Chiapas para conocer la situación en cuanto al respeto a las garantías individuales.

Gonzalo Franco Aixela, vocero de la CCIODH, informó esta noche que la agresión ocurrió al mediodía, cuando los 10 integrantes del organismo internacional que recorren la zona de Altamirano -siete grupos más se encuentran en otras regiones- salían del ejido Morelia, donde se ubica uno de los cinco *Aguascalientes* zapatistas.

Explicó que los presuntos paramilitares, encabezados por un indígena identificado como Lorenzo López Luna, pararon la camioneta en que viaja el grupo y durante 10 minutos "estuvieron golpeándola, incluso le arrancaron la antena, amenazándolos con agredirlos físicamente", lo cual no ocurrió, porque los internacionalistas no se bajaron de la unidad. Explicó que los activistas permanecieron en el vehículo, porque "nuestra política es no responder a las provocaciones de ningún grupo que pretenda agredirnos".

Tras recordar que sólo los presuntos paramilitares y los jefes militares de Chiapas no han aceptado reunirse con la CCIODH durante ésta, su tercera visita a la entidad, Franco consideró que la agresión de hoy "es un aviso y un acto de intimidación".

Manifestó preocupación por el grupo de 20 activistas que este día debió viajar al norte del estado, donde la situación se ha tensado en los días recientes a raíz de la detención de Diego Vázquez Pérez, presunto líder del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, y por el asesinato de Eduardo Raúl Hernández Parceró, el pasado viernes en la comunidad de Jolaco

La Jornada 26 de febrero de 2002

Regreso a la Marcha del color de la tierra Luis Hernández Navarro

Hace un año que la *Marcha del color de la tierra* comenzó. Hoy, como entonces, el gobierno de Vicente Fox carece de iniciativas para solucionar el conflicto armado en Chiapas y la problemática indígena en el país. Su comportamiento semeja el de un corcho flotando en el mar: no se hunde, pero no se dirige a sitio alguno. Incapaz de elaborar una política activa, inquieta por el silencio del EZLN, presa del conservadurismo panista, la nueva administración parece conformarse con administrar el conflicto, aplaudir los procesos de reconciliación ficticia impulsados por el gobierno de Chiapas, esperar el milagro de que la política social desfonde la resistencia zapatista y simular que la situación se encuentra "bajo control" para venderle a la comunidad internacional la idea de "aquí no pasa nada".

Su esperanza de que la derrota electoral del PRI quitara razón de ser a los rebeldes mexicanos resultó infructuosa, por lo que se ha quedado sin recursos políticos para enfrentar el momento. En las cárceles de Chiapas, Tabasco y Querétaro permanecen 29 zapatistas detenidos. Los paramilitares siguen actuando. La presencia en el país de cerca de 100 defensores de derechos humanos, organizados en la Tercera Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, desmiente la versión de que el asunto chiapaneco ya no preocupa en el exterior.

El fracaso de la política indígena del nuevo gobierno ha sido estrepitoso. Coptó a la dirección de la ANIPA pensando que así podría controlar el movimiento indígena, para deshacerse parcialmente de ella antes de un año sin alcanzar resultado alguno visible. Creó una comisión especial dedicada a apagar fuegos, que reproduce esquemas paternalistas en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Ahora se dispone a emprender una reforma institucional que "tirará el niño con el agua sucia de la bañera" al descentralizar las funciones del Instituto Nacional Indigenista (INI) hasta ahogarlo en la red de intereses de los cacicazgos regionales.

Al pasmo gubernamental hay que añadir la incapacidad de la Cocopa para generar iniciativas de coadyuvancia consensadas entre las partes. Ni siquiera pudo sumarse a una de las más interesantes acciones para destrabar el conflicto, impulsada recientemente por 168 legisladores: la nueva presentación al Congreso de la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, elaborada por ella misma en 1996. El hecho es penoso y, a su lado, todas las demás acciones que han emprendido sus integrantes sólo parecen fuegos de artificio, iniciativas de promoción personal para ganar un pequeño espacio en los medios de comunicación, y no genuinas acciones a favor de la distensión. El fracaso de la comisión de concordia como impulsora de la paz es mayúsculo y vergonzoso.

Anulados los poderes Ejecutivo y Legislativo como actores capaces de destrabar el conflicto, el balón está ahora en la cancha del Poder Judicial. Próximamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver las más de 300 demandas de controversia constitucional en contra de la *ley Bartlett-Fernández de Cevallos- Ortega*. Estas inconformidades fueron presentadas en su inmensa mayoría por municipios indios y

han sido acompañadas de acciones de desobediencia civil pacífica: tomas de gobiernos locales, defensa de los territorios y recursos naturales, consultas y reuniones. Apenas este fin de semana en Oaxaca decenas de organizaciones étnicas y autoridades tradicionales y constitucionales promovieron una movilización nacional de los pueblos originarios ante la Suprema Corte para hacer saber a los ministros que están pendientes de la resolución. La disyuntiva que la SCJN tiene delante de sí es similar a la que tuvo que enfrentar en enero de 1994.

En la primera *Declaración de la Selva Lacandona*, en la que los insurrectos declararon la guerra y reivindicaron su carácter de fuerza indígena al señalar que "son producto de 500 años de luchas" (que de acuerdo con el escritor Manuel Vázquez Montalbán es "un grito de protesta al estilo del siglo XIX"), convocaron no a destruir el Estado burgués, ni a instaurar el socialismo, sino a algo mucho más modesto: que el Poder Legislativo y el Poder Judicial se abocaran a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación deponiendo a Carlos Salinas de Gortari.

El fallo de la Corte será crucial tanto para el futuro de las relaciones entre el Estado mexicano con los pueblos indios como para el proceso de paz. Una negativa a reparar el agravio legislativo cerrará las posibilidades de solución al conflicto. El Poder Judicial tiene delante de sí una oportunidad única para reparar un daño histórico. Los ministros tienen la palabra.

La Crónica 26 de febrero de 2002

Paramilitares agreden a observadores de CCIODH en Chiapas

Laura Matus en San Cristobal

Integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos fueron agredidos por paramilitares en el municipio de Altamirano mientras realizaban una visita de observación por las comunidades indígenas.

Lo anterior fue confirmado por el vocero de la CCIODH, Gonzalo Franco quien narro que el pasado domingo "un grupito de paramilitares se acercaron a la camioneta donde estaban 10 observadores y empezaron a golpearla y agredieron brutalmente a nuestros compañeros".

Detalló que en el cuarto día de actividades la delegación de la CCIODH fue agredida en la comunidad de Morelia en el municipio de Altamirano, zona de influencia zapatista.

Al respecto el observador español dijo que los paramilitares encabezados por Enrique López Luna golpearon con puños y pies por espacio de 15 minutos la camioneta en la que viajaban.

La República 27 de febrero de 2002

Amplio recorrido por Chiapas de la Comisión de Observadores

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía se reunió con integrantes de la Comisión Internacional de Observadores Civiles, que visitaron Chiapas con el objetivo de conocer de primera mano la realidad social y económica del estado.

Durante la reunión, el gobernador Salazar, acompañado de miembros de primer nivel de su gabinete, explicaron a los observadores el trabajo en pro del desarrollo integral de Chiapas aplicado en los primeros 4 meses de la transición gubernamental.

El mandatario estatal expuso el cambio en los programas sociales del gobierno que se llevan a cabo en consenso con las comunidades indígenas y no indígenas de la entidad. Destacó la desaparición del programa “Las Cañadas”, que los anteriores gobiernos federal y estatal aplicaron como una acción de contrainsurgencia, para ser sustituido por el programa de Desarrollo Sustentable de la Selva.

El nuevo programa, explicó, atiende no sólo a las comunidades donde existe presencia del EZLN, sino incluye a toda la región Selva, con carácter incluyente y plural.

Por otra parte, el gobernador Pablo Salazar hizo un amplio recuento de las acciones que realiza el nuevo gobierno para depurar y capacitar a los cuerpos policíacos del estado y para resarcir los rezagos que en materia de justicia prevalecieron durante años en Chiapas.

“Somos un gobierno de buena fe, que acreditamos en los hechos nuestra vocación humanista y de respeto a los derechos humanos”, expresó el gobernador Salazar al tratar el tema con los observadores que representan a 114 países, como Francia, Italia, Alemania, España, entre otros.

Los observadores, que fueron encabezados por el español Sigfrido Mirayes, mostraron especial interés en los ejes de desarrollo bajo los cuales se sustenta el Plan Estatal de Gobierno y se mostraron satisfechos ante la apertura de la información otorgada por las autoridades del estado.

Luego de la reunión, Sigfrido Miralles sostuvo en entrevista ante los medios de comunicación, que durante el recorrido por las comunidades de las distintas regiones de Chiapas contaron con la libertad requerida para entrevistarse con habitantes, autoridades municipales y representantes de organismos no gubernamentales, contrario a lo que sucedía en el pasado.

Participaron en la reunión el Secretario de Gobierno, Emilio Zebadúa González; la Secretaria de Desarrollo Social, María de los Ángeles Cruz; el Procurador General de Justicia, Mariano Herrán Salvatti; el Secretario de Seguridad, Mauricio Gándara Gallardo y el Secretario de Pueblos Indios, Porfirio Encino Hernández.

Les impactó la pobreza

Cosme Vázquez/ASICH

La pobreza en Chiapas se puede medir con tan solo el bajo porcentaje de población que tiene acceso al agua potable, electrificación o salud, sostuvo Marie Helene Coté, miembro de la Comisión Civil Internacional de Observadores de Derechos Humanos.

De ahí que para los observadores que visitaron el estado la desigualdad en México es impactante.

Lo que les impresionó es que en el estado hayan comunidades en donde se tiene que caminar decenas de kilómetros para poder llegar a un hospital, lo que es un disparate en comparación con el resto de México, dijo.

Dijo que eligieron visitar al estado debido a que aquí es la zona de conflicto, además de que impera la pobreza, problemas y desigualdades sociales.

Los observadores de 14 países vinieron a Chiapas para ver si el gobierno de Vicente Fox cumple con lo que prometió o cuando menos si se ha comenzado a trabajar en la posible solución de los problemas de las comunidades indígenas y campesinas.

En su visita a Chiapas los observadores vieron lo relacionado al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), con lo que pudieron constatar que falta mucho trabajo por hacer en cuanto de derechos agrarios en la entidad.

Dijo que era una preocupación en particular lo de este programa de gobierno por el cambio en la atención social en las comunidades, pero las autoridades de la Procuraduría Agraria les aseguraron que con el Procede se ha venido disminuyendo los conflictos agrarios.

Sin embargo, de acuerdo a lo que han visto ahora pueden opinar que todavía hay muchos casos pendientes por resolverse en la materia, información que incluirán en el reporte que harán ante las autoridades de su país, incluso, y del gobierno mexicano, así como a las organizaciones de la sociedad civil.

La comisión la integran observadores de España, Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, Palestina, Nicaragua, Guatemala y otros de Europa. Recorrieron la zona de conflicto y hasta visitaron las cárceles del estado, Cerro Hueco. En Palacio de Gobierno se reunieron en privado con el gobernador Pablo Salazar y parte de su gabinete.

Visitaron Cerro Hueco

Yudith Gutiérrez Morales/ASICH

Durante su visita al penal de Cerro Hueco, la Comisión Civil Internacional de Observadores de Derechos Humanos calificó como injustas las condiciones en las que se encuentran los presos zapatistas.

Sigfrido Miralles, integrante de dicha comisión, mencionó que el objetivo principal de su reunión con el gobernador Pablo Salazar fue tocar todos los temas que conciernen a la defensa y cumplimiento de los derechos humanos en el estado.

Respecto a las actividades que la CCIODH ha realizado en nuestro país, citó que “compañeros de la Comisión han visitado a los presos zapatistas en Tabasco, San Cristóbal de las Casas y en el Cereso 01 de Tuxtla Gutiérrez”.

Reveló que esperan hacer algunas recomendaciones al gobierno federal sobre la situación de los presos zapatistas, y que dentro de todas las consideraciones y peticiones que hagan, harán un exhorto al gobierno mexicano para que estas personas sean liberadas.

La República 28 de febrero de 2002

Terminó visita la CCIODH

Manuel de la Cruz

San Cristóbal de las Casas, Chis., febrero 27 (CAMBIO).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos CCIODH, dijo que la suspensión del proceso de paz

entre el EZLN y el Gobierno mexicano, ha sido un factor para la violación de derechos humanos en Chiapas.

"El hecho que no haya diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN y el Gobierno, es una de las razones para que haya tantas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chiapas", dijo su vocero, Gonzalo Franco.

104 integrantes de la Comisión integrada por observadores de 14 países europeos, concluyeron ayer su tercera visita a más de 50 aldeas asentadas en la zona de conflicto. En cuanto a la situación de desplazamiento, la francesa Elena Ruox comentó que se entrevistaron con personas que han sido desplazadas desde 1995, producto de la violencia paramilitar, y que no han podido retornar a sus lugares de origen, ni han recibido indemnización por las cosas que han perdido.

Otro de los voceros, el español Gonzalo Franco indicó que en Chiapas existen unos 50 mil desplazados, de esta cifra, unos 10 mil son producto directo del conflicto con los paramilitares, y unos 40 mil son productos en torno al tema de la propiedad de la tierra.

En su última conferencia de prensa en esta ciudad, la CCIODH, manifestó su preocupación por el alto número de denuncias de violaciones de derechos humanos que recibieron en cárceles y comunidades indígenas.

Franco señaló al ejército mexicano como uno de los principales violadores a los derechos humanos de los indígenas que habitan en zonas de influencia de la guerrilla zapatista e indicó que aun cuando la Comisión constató una menor presencia de las fuerzas armadas en algunas zonas recibieron denuncias de patrullajes por aire y tierra y de la instalación de retenes.

Por su parte Eve Thomas, integrante del organismo independiente, expuso que resulta muy preocupante las violaciones que se comenten contra indígenas.

Añadió que en su recorrido por las dos cárceles de Chiapas, encontraron a más de 100 personas que se declararon presos políticos.

Para la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, la situación económica y social en las comunidades indígenas de Chiapas, siguen sufriendo un gran deterioro.

La CCOIDH, indicó que 20 días darán a conocer las conclusiones finales del trabajo de observación que realizaron en esta entidad y que la entregarán a las instituciones europeas que avalaron su proyecto.

La Jornada 28 de febrero de 2002

Comisión civil de observadores internacionales concluye visita a Chiapas

ANGELES MARISCAL, HELIO ENRIQUEZ Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Al concluir su gira de una semana por Chiapas, la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos (CCIODH) reportó que durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía se han cometido al menos 12 casos de violaciones a las garantías individuales.

La CCIODH, integrada por 104 activistas de 14 países de Europa y América, rindió un primer informe de su recorrido. Dijo que "no hay duda que la falta de diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una de las razones por las cuales hay tantas denuncias de violaciones a los derechos humanos" en Chiapas.

Esto ocurrió al tiempo que en el penal de San Cristóbal de las Casas tres presos, reconocidos por el EZLN como miembros de sus filas, denunciaron que fueron puestos en una celda de castigo como represalia por haber realizado denuncias ante la CCIODH. Rafael López Sántiz, Juan Vázquez Gutiérrez y Aurelio Sánchez Jiménez, por conducto de su representante, Abelardo Méndez Arcos, denunciaron que horas después de haberse reunido con los observadores fueron internados en la celda de castigo del penal, donde permanecían este día.

El castigo, dijo, se dio por el "malestar" de los "representantes" del resto de los reclusos, quienes los amenazaron con agredirlos por no haber sido considerados durante la reunión con los observadores.

Señaló que el director del penal, Erasmo Ramírez, "castigó" a los tres zapatistas para meterlos en cintura por el "desorden" causado. Ante esta situación, exigió a las autoridades que suspendan la sanción, que calificó como "una violación directa al derecho a organizarse y efectuar denuncias".

También en San Cristóbal, los voceros de la CCIODH mostraron especial preocupación porque los tres presos fueron "trasladados a celdas de castigo" por haberse entrevistado con miembros de ese grupo. "Hubiéramos preferido que no nos autorizaran entrevistarnos con ellos a que los castigaran", dijeron.

Continúan los patrullajes militares

El grupo dijo haber constatado una presencia menor del Ejército Mexicano en algunas zonas, pero recibió denuncias de que continúan los patrullajes, especialmente en el municipio de Ocosingo y en la región fronteriza con Guatemala.

Agregó que "los sobrevuelos de helicópteros siguen sembrando zozobra en las comunidades, los retenes intermitentes impiden el libre tránsito de los pobladores y en los lugares donde permanecen los cuarteles militares la población se queja de la contaminación de ríos y predios aledaños".

La CCIODH aseveró que recibió "numerosas denuncias acerca de la permanencia de estructuras paramilitares" en varias zonas de la entidad, lo cual, en la región norte, por ejemplo, "genera fuertes tensiones en las comunidades, ya que el sólo hecho de que no se haya procedido al desarme de los paramilitares es una constante amenaza para la seguridad de la población civil".

Los datos recabados en esta visita servirán de base para el informe que la CCIODH espera tener listo el 17 de marzo para entregarlo a instancias internacionales. La comisión se dijo "sorprendida" por el número "tan grande de presos (unos 80) que manifestaron estar encarcelados por motivos políticos".

Los voceros del grupo dijeron que "hay elementos que demuestran que existen casos de tortura y que varios presos indígenas no tuvieron acceso a abogados ni a traductores", por lo cual "se puede presumir que podemos cuestionar el estado de derecho aquí, porque más de cien personas dicen que están encarceladas injustamente".

En otra charla con la prensa en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, los observadores dijeron que recibieron la documentación testimonial sobre violación a los derechos humanos de 69 miembros del Movimiento Campesino Regional Indígena, detenidos en julio pasado durante un *operativo* policiaco en la comunidad Zamora Pico de Oro, municipio Marqués de Comillas.

Documentaron el atentado contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, perpetrado por un grupo armado el pasado 13 de enero. La propia CEDH entregó a los observadores el expediente de recomendaciones y quejas emitidas por el organismo al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y a varios funcionarios del gabinete.

López Hernández señaló que los observadores tuvieron acceso a la información de cada uno de los casos y les entregaron expedientes y testimonios de los afectados sobre el atropello a las garantías individuales de indígenas y campesinos, cometidas por funcionarios y efectivos de las corporaciones policiacas en la actual administración.

La CCIODH se reunió a puerta cerrada con López Hernández y con el procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, quienes presentaron sus versiones sobre la situación de los derechos humanos.

En el ámbito local, este día la CEDH emitió la recomendación CEDH/05/2002, dirigida a Herrán Salvatti, derivada de la inejecución de órdenes de aprehensión dictadas en los expedientes 141/998, 82/999 y 67/2001 por el juez mixto de distrito de Motozintla. Otra está dirigida al alcalde de Salto de Agua, Domingo Vázquez Arcos, que se derivó de la queja por los excesos cometidos por la policía municipal en agravio de Eulalio Hernández Pérez, Armando Torres Torres y Helmar Hernández Hernández, detenidos sin orden de aprehensión y con violencia.

La Jornada 1 de marzo de 2002

El EZLN rompería el silencio cuando la Corte dictamine controversias: comisión observadora

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 28 de febrero. *Comandantes* del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) manifestaron a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) que el diálogo para alcanzar la paz en Chiapas no se ha reanudado porque el gobierno federal no ha cumplido las tres "señales" solicitadas por el EZLN el 2 de diciembre de 2000.

Los jefes rebeldes hicieron hincapié en el tema de las reformas sobre derechos y cultura indígenas aprobadas en abril de 2001 por el Congreso de la Unión. "Los *comandantes* con quienes nos hemos reunido manifestaron claramente su inconformidad por las reformas indígenas y por el hecho de que las señales no se han cumplido", informaron Gonzalo Franco Aixela y Helena Roux, voceros de la CCIODH, que este miércoles finalizó un recorrido por más de 50 comunidades de Chiapas.

Durante las entrevistas les dijeron que ante la imposibilidad de avanzar en el proceso de paz con el gobierno del presidente Vicente Fox, el EZLN trabaja en la consolidación de los cerca de 40 municipios autónomos que creó en distintos puntos de los Altos, la selva y el norte de la entidad desde diciembre de 1994.

Lo anterior, les explicaron, tiene como propósito fortalecer los procesos de autonomía de las comunidades indígenas, que el Poder Legislativo les negó mediante las reformas promulgadas por el Ejecutivo federal el 14 de agosto pasado.

Franco Aixela y Roux explicaron que las reuniones con los *comandantes* del EZLN se dieron en las cabeceras de algunos municipios autónomos visitados por los activistas provenientes de distintos países de Europa y América, del 21 al 27 de febrero.

Aclararon que "formalmente, como EZLN, el grupo rebelde no ha creído conveniente darnos una entrevista, pero con *comandantes* -que se presentaron "muy formales" con sus nombres y con el rostro cubierto con pasamontañas- hemos hablado en distintas zonas".

Antes de partir a la ciudad de México, los activistas agregaron que por los comentarios hechos por los rebeldes, tienen la impresión de que el EZLN "no quiere romper el silencio" que mantiene desde hace diez meses, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita los resolutivos acerca de las controversias constitucionales y demandas de amparo presentadas por ayuntamientos y comunidades contra las reformas indígenas.

"Incluso ha habido una pregunta de la CCIODH al respecto y expresaron que están en silencio y que no responderían esta pregunta específica."

Franco Aixela y Roux subrayaron que de parte del EZLN había "mucho interés" por hablar con los observadores. Tenemos "la impresión de que había expectativas en cuanto a nuestra visita y se ha demostrado de alguna forma en la manera en que fuimos recibidos. A veces nos hemos encontrado, aparte de las entrevistas con representantes del EZLN, con comitivas de más de mil personas que estaban esperándonos, como en San Marcos o Roberto Barrios, y las entrevistas se dieron en varias etapas. Una parte fueron las reuniones con los *comandantes* zapatistas y otra con los representantes y habitantes de las comunidades". Subrayaron que las entrevistas duraron hasta siete horas, y fueron "preparadas y concertadas, con consultas intermedias y preguntas".

Por otra parte, afirmaron que el número de soldados en la zona de conflicto "no ha variado", a pesar del retiro de siete campamentos militares. "Lo que ha variado es la discreción, y eso lo agradecen las comunidades porque les facilita hacer su vida cotidiana sin la cantidad de impedimentos que suponía la presencia del Ejército, tan intimidatoria, en lo que podríamos decir es la cocina de sus propias comunidades. Se ha producido una retirada a otros campamentos, pero no ha disminuido el número de efectivos."

Afirmaron que la información que la CCIODH recibió en esta tercera visita "supera con creces, en cantidad y calidad, la que recabaron en los dos recorridos anteriores", y esto podría explicarse porque esta vez aumentó el número de comunidades visitadas, aparte de que ahora llegaron 104 observadores a la zona.

El Universal 2 de marzo de 2002

Persiste violación a derechos humanos en Chiapas: relatora

Liliana Alcántara y Julián Sánchez/Enviada y reportero

TAPACHULA, Chis. La relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, concluyó ayer su visita por la frontera sur de México a fin de constatar las violaciones a los derechos humanos que cometen autoridades

locales y federales en contra de los centroamericanos que intentan cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos.

Insistió en que es delicada la situación que enfrentan sobre todo las mujeres migrantes y los menores no acompañados, pues según organismos no gubernamentales se sospecha que el aumento en el flujo de este sector de la población obedece a la operación de bandas internacionales dedicadas al tráfico de personas y a la explotación sexual comercial.

En tanto, en la ciudad de México, la Comisión Civil Internacional de Observación por los derechos humanos concluyó que es preocupante la violación de las garantías individuales en el país y lejos de mejorar permanece igual que hace dos años.

Luego de una visita de dos semanas, representantes de esa comisión alertaron de que hechos como el homicidio de Digna Ochoa y el que persista en Chiapas una situación generalizada de impunidad, obstáculos en el acceso a la justicia y prácticas permanentes de tortura, son una evidencia de la grave situación que existe en la citada materia.

Eve Thomas, Claude Rioux, Helene Roux y Gonzalo Franco, dieron a conocer en conferencia que durante más de 10 días realizaron entrevistas oficiales, con la sociedad civil y visitas a comunidades indígenas en Chiapas, donde se percataron que las causas que generaron la rebelión indígena siguen vigentes, al igual que las condiciones que posibilitan la violación de derechos humanos "a un nivel difícilmente respetable para la sociedad".

"La situación continúa igual que en junio de 1999 cuando se disolvió la Conai... y no se ha puesto fin a la militarización, ya que sólo se han desmantelado siete posiciones."

No obstante, reconocieron que si ha reducido el hostigamiento militar y la presencia permanente del Ejército en la zona de conflicto, aunque su presencia aún existe.

Coincidieron en que no se han dado avances significativos en el terreno de la lucha contra la impunidad y continúa una situación generalizada de falta de acceso a la justicia, especialmente para los indígenas. "Otra preocupación es la persistencia de prácticas de tortura inaceptables en un estado de derecho".

Resaltaron que el fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos queda en entredicho, después del asesinato de algunos de sus miembros más destacados, como el caso de Digna Ochoa y las amenazas permanentes a miembros de organizaciones de defensa de garantías individuales.

Manifestaron su beneplácito de que el gobierno de México pretende colaborar en la creación de una oficina permanente de la ONU sobre derechos humanos en la ciudad de México, para la cual se destinaría una suma importante de recursos.

A su vez, en una breve entrevista que concedió luego de reunirse con organismos civiles y hacer recorridos por las estaciones fronterizas que colindan con Guatemala, la relatora Rodríguez Pizarro señaló que la soberanía de los estados deben defenderse pero también tienen la obligación de ofrecer seguridad tanto a los pobladores nacionales como aquellos que no lo son.

Por su parte, Héctor Pérez, responsable de la oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta región, informó que desde septiembre del año pasado a la fecha se han atendido 400 quejas por violaciones a las garantías fundamentales de migrantes, principalmente centroamericanos.

El Universal 3 de marzo de 2002

Continúan violación a los derechos humanos e impunidad contra los indígenas, reportan.

Liliana Alcántara

Al concluir su visita por México y recorrer el estado de Chiapas, los miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, aseguraron que se mantienen las causas que generaron la rebelión indígena en ese estado de la República y persisten las violaciones a los derechos humanos contra los pueblos indios.

Informaron que en la región prevalece la impunidad y hechos inaceptables como la tortura, además, sólo han podido retornar a sus comunidades 2 por ciento de los 50 mil indígenas que han sido desplazados desde 1995.

En un informe preliminar que elaboraron luego de su visita de 15 días a nuestro país y que concluyó el día de ayer, los observadores constataron "la persistencia de elementos de contrainsurgencia en el tratamiento del conflicto en Chiapas".

Aseguraron los miembros de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos que no se ha puesto fin a la militarización, ya que sólo se han desmantelado 7 posiciones y el número de efectivos es invariable. "Lo que ha cambiado es la discreción de su presencia y eso lo agradecen las comunidades porque les facilita su vida cotidiana".

En materia de justicia, la Comisión Civil señaló que los indígenas aún no tienen acceso a ella: pese a que fueron liberados 90 presos políticos zapatistas, actualmente permanecen en las cárceles del estado alrededor de 100 presos políticos en condiciones precarias. "Además existe una preocupante persistencia de prácticas de tortura inaceptables en un estado de derecho".

Los desplazados

El organismo civil señaló que en las visitas anteriores recomendaron al gobierno del estado de Chiapas facilitara el retorno de los desplazados con la devolución íntegra de sus pertenencias y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Sin embargo, los observadores internacionales aseguraron que el problema se arrastra desde 1995 y todavía no ha sido resuelto, ya que de los 50 mil desplazados (10 mil a causa del conflicto armado y 40 mil por problemas agrarios) sólo han retornado alrededor de mil personas, sin que la mayor parte de ellas haya recibido alguna indemnización.

Otro tema de preocupación, dijeron, es la impunidad que afecta tanto a los indígenas como a los activistas y defensores de derechos humanos, por ello reiteraron su recomendación de erradicar ese problema "con acciones globales y no meramente simbólicas".

La Jornada 3 de marzo de 2002

Siguen patrullajes militares en Ocosingo, afirma la Comisión Civil Internacional

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos concluyó su trabajo en la zona de conflicto, donde encontró que los patrullajes militares continúan en Ocosingo, a pesar de que la presencia de las fuerzas federales es menor en algunas regiones, y que aún persiste el fenómeno de los desplazados de guerra. La organización agradeció al gobierno de Chiapas por las facilidades y la disponibilidad para la realización de los trabajos de sus delegados.

El resultado de la visita de los extranjeros a suelo chiapaneco fueron ocho observaciones. De ellas, la más sobresaliente se refiere a que "hemos podido constatar una presencia menor del Ejército federal en algunas zonas. Hemos recibido informaciones de que en otras siguen los patrullajes, especialmente en el municipio de Ocosingo y en la zona fronteriza con Guatemala. Los sobrevuelos de helicópteros siguen sembrando zozobra en las comunidades. Los retenes intermitentes impiden el libre tránsito de los pobladores en los lugares donde permanecen los cuarteles militares. La población se queja de la contaminación en ríos y predios aledaños".

El problema de los desplazados

Otra denuncia del grupo de observadores se refiere a que las comunidades de la región de los Altos de Chiapas consideran que no existen garantías suficientes para el retorno a sus lugares de origen, y los recortes de ayuda humanitaria hacia los desplazados son percibidos como un factor de presión para un retorno en condiciones riesgosas.

También, en la zona norte de los Altos, numerosas familias permanecen desplazadas, las cuales no solamente han carecido de acceso a la justicia y de indemnizaciones, sino que se ven afectadas por la situación de impunidad imperante en la zona.

Otro de los descubrimientos fue que el grupo de observadores atestiguó que sí existen presos de opinión (conciencia) en distintos penales de Chiapas: "Algunos de los reclusos manifestaron que la confesión de delitos les fue arrancada bajo tortura".

Las comunidades hicieron énfasis en el deterioro de sus condiciones de vida, en lo económico y en lo social, y los programas de desarrollo, enfocados a la lucha contra la pobreza, "son valorados como discriminatorios".

La Jornada 4 de marzo de 2002

Niegan acceso a miembros de Comisión Civil Internacional a penal de Querétaro

ALEJANDRO GONZALEZ ANAYA CORRESPONSAL

Querétaro, Qro., 3 de marzo. Autoridades del centro de readaptación social de esta capital negaron el acceso al penal a integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), quienes pretendían visitar a Jerónimo Sánchez Sáenz y a Anselmo Robles Sánchez, reclusos desde 1998 por su presunta vinculación con el EZLN.

A pesar de que la CCIODH solicitó permiso al gobierno estatal desde hace tres semanas para visitar a los reclusos, el penal de San José El Alto se convirtió en la primera cárcel en la que se impide el acceso a los observadores internacionales.

Así las cosas, los activistas de los derechos humanos aseveraron que la decisión del personal del centro de readaptación social, de negarles el acceso, podría generar una recomendación contra las autoridades federales y estatales.

Después de hora y media de permanecer afuera del penal de San José el Alto, los cuatro representantes de la CCIODH fueron comunicados telefónicamente, desde las rejas del reclusorio, con el director de la penitenciaría, Fernando García García, quien les dijo a los activistas que no se les permitiría entrevistarse con los reos pro zapatistas.

García García manifestó que la prioridad era permitir el ingreso de los familiares de los reclusos, y por ello no se les autorizaría entrar.

"Como ustedes observan, hoy (domingo) es día de visita familiar y no tengo contemplada la visita de ustedes. Únicamente pueden entrar personas que están dentro de nuestro padrón de visita", puntualizó el funcionario.

De nada sirvió el permiso de Gobernación
Posteriormente, en conferencia de prensa, Teresa González de Chávez, en nombre de los observadores, expresó que Querétaro es el primer lugar donde no se les permite realizar su trabajo, a pesar de que tienen el aval de la Secretaría de Gobernación para visitar diferentes prisiones.

"En algunos lugares no hemos tenido acceso a la cárcel, pero sí hemos podido entrevistar a los presos", manifestó González de Chávez.

La activista descartó que vayan a regresar a Querétaro en fecha posterior, ya que, puntualizó, éste es el último día en que los integrantes de la CCIODH estarán trabajando en México.

Señaló que la valoración final de lo sucedido en Querétaro la realizarán las 104 personas de 14 países que conforman el organismo.

Los reclusos a quienes pretendían visitar los activistas, Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles Sánchez, tienen pendiente un proceso por participar en la agresión a miembros del gabinete presidencial de Ernesto Zedillo, el 5 de febrero de 1998, luego de celebrarse un aniversario más de la Constitución política de México.

El EZLN definió a los dos reclusos, líderes del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ), como "presos políticos". Como se recordará, el gobierno federal condicionó la liberación de éstos a que se reiniciaran las negociaciones para firmar la paz.

Ofrece la CCIODH a los ejidatarios de Atenco *ventilar* su problemática en tres países y la CIDH

JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSAL

San Salvador Atenco, Mex., 3 de marzo. Integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos (CCIODH), quienes recorrieron la zona expropiada para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, ofrecieron a los campesinos que defienden sus tierras difundir la problemática en sus países ¿Austria, Alemania y Suecia? y llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sus demandas.

Los observadores arribaron a la cabecera municipal de San Salvador Atenco, donde recogieron los testimonios de los ejidatarios en resistencia, quienes denunciaron el "genocidio" que pretende hacer el gobierno federal con la construcción de la terminal aérea

y los constantes hostigamientos policiacos y "sicológicos", que se vienen registrando por parte de las autoridades.

Tras un recorrido por la zona expropiada, los labriegos solicitaron a la comisión de observadores, entre los que se encontraban dos austriacos, dos alemanes y un sueco, su intervención para denunciar la violación a sus derechos humanos y evitar así que se lleve a cabo el proyecto aeroportuario.

América del Valle, integrante del movimiento campesino, informó que el ofrecimiento de los observadores es difundir la problemática en sus países y llevarla a la CIDH. Esperan respuesta de la Presidencia

En tanto, hasta este domingo, los ejidatarios en resistencia que solicitaron al presidente Vicente Fox participar en un debate público no habían recibido respuesta por parte de la Oficina de Atención Ciudadana, como se les había prometido. Los labriegos partirán este lunes por la mañana al Auditorio Nacional, en la ciudad de México, para esperar que el jefe del Ejecutivo se presente.

Por otra parte, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, señaló que los terrenos que se utilizarán para la canonización de Juan Diego son propiedad privada y federal, no ejidales. Esto, en respuesta a la protesta efetuada la víspera por los ejidatarios atequenses que no quieren que se efectúe la ceremonia en sus terrenos.

El obispo agregó que la diócesis de Ecatepec no intervendrá en la problemática de San Salvador Atenco. "No intervendremos para desintegrar su movimiento, pero tampoco vamos a permitir que nadie interfiera en la zona que nos prestaron para la canonización de Juan Diego. No vamos a hacer nada en contra de ellos (los ejidatarios), pero sí les pedimos respeto para nuestra tierra. El mismo respeto que quieren para la suya."

Destacó que el movimiento de Atenco es muy respetable, "y les digo que yo no apoyo ni *desapoyo* la creación del aeropuerto en Texcoco. Yo lo único que sé es que viene el Papa. Lo único que vamos a hacer es preparar un lugar digno para que canonicé al primer indígena de México y de Latinoamérica".

Finalmente destacó que al Papa no le interesa lo del aeropuerto, y después de la canonización de Juan Diego los terrenos van a quedar como están.

Reforma 4 de marzo de 2002

Impiden en reclusorio acceso de observadores

Por FERNANDO PANIAGUA GRUPO REFORMA

QUERETARO.- Autoridades del Centro de Readaptación Social de San José el Alto impidieron este domingo a integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) entrar a las instalaciones del penal, quienes se entrevistarían con dos presos zapatistas.

El director del Centro de Readaptación Social de la capital del estado, Fernando García García, informó personalmente a los activistas que no podrían entrar a las instalaciones del penal, pese a que el trámite para ello se había realizado desde hace tres semanas.

Luego de dos horas de espera a las afueras del Cereso, la delegación de cuatro integrantes de CCIODH que pretendía entrevistarse con los llamados presos zapatistas Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles, cuya liberación es demandada por el EZLN para reanudar el diálogo de paz en Chiapas, fue obstaculizada.

Rodeados siempre de personal de la Secretaría de Gobierno local y de periodistas que cubrían la visita de los activistas de la CCIODH a esta ciudad, el funcionario dijo que la prioridad era permitir la visita de los familiares de los reclusos y por ello, no se les permitiría la entrada al penal.

Ante ello, Teresa González de Chávez, integrante de la delegación, indicó que la actitud asumida por las autoridades penitenciarias les resultó sorpresiva y no descartó que ante esto, el organismo al que pertenecen emita una recomendación al Gobierno mexicano.

"Vamos a informar al resto de la comisión y no haremos valoración alguna. Haremos un informe y las recomendaciones posiblemente, pero hasta que no se reúna la comisión y (se elabore) todo el informe, no podemos adelantar mucho", afirmó González de Chávez.

El director del penal fue claro, el domingo es día de visita familiar, esa es la prioridad y, además, él desconocía la visita de los activistas.

"Hoy es día de visita familiar, y nosotros no teníamos contemplada la visita de ustedes. Hoy sólo pueden ingresar las personas que tenemos en nuestro padrón de visitas. Yo no tengo conocimiento (de que se hubiera tramitado el acceso de los activistas). Aquí únicamente ingresan las personas que estén registradas", refirió García a los activistas a las puertas del centro penitenciario.

Incluso, el funcionario refirió que si los integrantes de la CCIODH deseaban entrar al penal debían tramitar un permiso especial con la Secretaría de Gobierno estatal.

El grupo estuvo integrado, además de Teresa González, por Julián Saldarriaga Isaza, Javier Javalera Chávez y Bernard Riguet, quienes forman parte de la CCIODH, integrada por 104 miembros que desde el pasado 17 de febrero están en nuestro país.

Con sede actual en Barcelona, España, los activistas buscaban conocer los avances de las más de diez recomendaciones que emitió el organismo hace poco más de un año y de las cuales, explicaron, prácticamente ninguna se ha cumplido.

Entre los aspectos que tocaban las recomendaciones de la CCIODH, destacan entre otras la militarización y paramilitarización en Chiapas, el acceso a la justicia, los casos de impunidad y la intención de poner un relator de la ONU de derechos humanos en México.

"Algunas (de estas recomendaciones) están intentándose suavizar, otras se mantienen básicamente en el mismo estado", explicó Julián Saldarriaga.

Ante la negativa de las autoridades, los defensores de los derechos humanos mostraron su extrañeza, toda vez que la labor que pretendían realizar en el Cereso de San José El Alto les había sido ya permitida en otros centros penitenciarios, entre ellos el de Cerro Hueco en Chiapas, el de Villahermosa en Tabasco y el de Almoloya.

Denuncian presencia militar

Chiapas Asimismo, los activistas denunciaron que tras su estancia en el país, las quejas más constantes de parte de grupos indígenas de Chiapas es la presencia de militares y paramilitares, además de las presiones de éstos para que las etnias dejen sus territorios.

"Hemos visto, a la espera de analizar que hay una queja, por lo menos de la comunidad indígena, de presencia militar y paramilitar y también una queja de impunidad ante los ataques de que son objeto".

La Jornada 5 de marzo de 2002

Aduce el gobierno queretano falta de comunicación de observadores internacionales

ALEJANDRO GONZALEZ CORRESPONSAL

Queretaro, Qro., 4 de marzo. El secretario de Gobierno estatal, Bernardo García Camino, aseveró que fue "por cuestiones de seguridad" la negativa que se dio a integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observadores de Derechos Humanos (CCIODH) para visitar a dos presos presuntamente vinculados con el EZLN que se encuentran en el penal de esta capital.

El funcionario precisó que la determinación de Fernando García García, director del Cereso de San José El Alto, de no dejar entrar a los observadores fue porque en ese momento había cerca de 2 mil personas en el penal, por ser día de visita familiar y por tratarse de un reclusorio que tiene situaciones y consideraciones particulares.

García Camino aseguró que los observadores de la CCIODH, José Javier Jabalera, Bernard Riguet, Julián Saldarriaga y Teresa González de Chávez "habían mandado un escrito avisando de su visita, pero no precisaron la fecha, por lo cual, ante la falta de comunicación, no fue posible que vieran a los presos Jerónimo Sánchez Sáenz y Anselmo Robles Sánchez".

Subrayó que por las condiciones en las que se debe manejar un Centro de Readaptación Social, debe haber en consecuencia condiciones "especiales" en cuanto a lo que se puede o no realizar dentro de él.

Con relación a la visita que integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) realizarán al mismo penal, e incluso al gobernador del estado, Ignacio Loyola, García Camino destacó que ya recibieron "comunicación por parte de la Secretaría de Gobernación para informarle sobre esas visitas".

Sin embargo, dijo, aún no ha sido precisada la fecha y hora en que los miembros de la Cocopa pretenden realizar sus actividades en Querétaro, "ya que hasta el momento existe la versión de que podrían estar en la entidad este martes, pero hay quien señala que será el próximo jueves".

La Jornada 23 de marzo de 2002

Denuncian nuevas incursiones de soldados y policías en municipios autónomos de Chiapas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 22 de marzo. Nuevos y constantes patrullajes militares atraviesan a diario las comunidades de Polhó y Francisco Gómez, según testimonio de observadores civiles procedentes de ambos municipios autónomos.

Coincidentemente, la importante comunidad de Jolnixtié, en las tierras bajas de Tila, ha denunciado patrullajes e incursiones en su comunidad de soldados y policías judiciales, así como reforzamiento de las posiciones militares existentes en la zona.

Estos nuevos movimientos de patrullaje, en Francisco Gómez (La Garrucha) se repiten cinco veces al día, y en Polhó hasta 20, como ocurrió inmediatamente después de la visita de la Comisión Internacional de Observación, a finales de febrero. En Jolnixtié son cada dos o tres días. En los dos últimos casos también participan policías judiciales.

En la zona norte, además, se han reactivado los síntomas de paramilitarización, en los que se mezclan un triunfalismo revanchista del PRI local, muy madracista, y las represalias de un sector radical de Paz y Justicia por la aprehensión del dirigente Diego Vázquez Pérez.

En su guerra de posiciones contra el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, los priistas y los paramilitares realmente existentes dirigen sus amenazas y agresiones contra las comunidades en resistencia, tanto de bases de apoyo zapatistas como de la llamada sociedad civil.

Las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la zona norte denunciaron ayer que en la comunidad Willis segunda sección, un grupo de 14 personas, encabezado por Oscar Ramírez Gómez, recibe adiestramiento militar. En el Anexo Pasijá de Morelos (municipio de Sabanilla) los paramilitares hacen alarde de tener "armas con altos calibres", y amenazan a los pobladores de Nueva Revolución: "Que sólo nos van a venadear en nuestros trabajadores, que de la cárcel no vamos a salir", refieren los campesinos.

En la colonia Ocotál también entrenan paramilitares, y por Monterrey segunda sección pasan ahora civiles armados interrogando acerca de los zapatistas. En Nueva Esperanza, un grupo similar es encabezado por el ex regidor Nicolás Gómez Álvarez y por Graciano Gómez Pérez, miembro del actual ayuntamiento de Tila.

Repudian órdenes de aprehensión

En una denuncia particular del poblado Nueva Revolución, las bases de apoyo del EZLN repudiaron las órdenes de aprehensión giradas por el juez municipal de Tila, Nicolás Martínez Martínez, contra pobladores de Tsaquil (Tila), colonia El Paraíso y Jesús Carranza (Sabanilla).

Ante el Ministerio Público de Yajalón, el magistrado acusó de "paramilitares" a Andrés Torres Pérez, Manuel García Torres, Regino Torres Torres, Margarita Torres Torres, Ildefonso Pérez Cruz, Francisco Hernández Pérez y Alejandro López Gómez.

Los indígenas niegan que estas personas sean culpables. Declaran: "Somos bases de apoyo del EZLN. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera regresar a la mesa de diálogo si permite esta provocación contra nosotros, siendo que son ellos, los de Paz y Justicia, los que andan armados en comunidades, carreteras, caminos de herradura y veredas?"

El 25 de febrero, en las cercanías de Los Angeles Anexo Jolsibaquil (Tila), los maestros que trabajan en la colonia Chilintiel fueron asaltados por un grupo armado, cuyos miembros portaban mochilas y uniformes. Más tarde, estos presuntos paramilitares fueron avistados en la comunidad de Shoctic. Por los mismos días, en el Anexo Francisco Villa (Sabanilla) fue visto un grupo de 15 encapuchados (algunos con pasamontañas rojos) portando armas de alto calibre.

Apenas dos días antes, el 22 de febrero, a las siete de la noche, fue asesinado Raúl Hernández López en un camino cerca de Miguel Alemán, bastión de Paz y Justicia. El pueblo de San José El Limar (que apenas una semana atrás felicitaba ampliamente al gobierno estatal por la captura del líder paramilitar Diego Vázquez Pérez), al exigir castigo a los victimarios del menor, declaró en un comunicado:

"Este acto, que altera la paz social, prueba que el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada para desactivar al grupo paramilitar, y es evidente que éste goza de total impunidad. ¿Hasta cuándo piensa actuar eficazmente el gobierno? ¿Seguiremos viviendo bajo el terror de un grupo que se hace llamar Paz y Justicia? ¿Cuánto más tenemos que morir para que el gobierno detenga este baño de sangre?"

En El Limar se acababa de firmar, el 27 de enero, un acuerdo de paz y reconciliación entre organizaciones de distinto perfil religioso y político, lo que también permitió la reapertura del templo católico, clausurado por Paz y Justicia. Antes de un mes después ya estaban acusando de asesinato a Paz y Justicia y a miembros del ayuntamiento de Tila. Como en los viejos tiempos de 1995-96.

Precisamente ahora, cuando los paramilitares de la zona norte lo desafían, el gobierno chiapaneco se abre infundados frentes de pleito con diversos defensores de derechos humanos, como Miguel Angel de los Santos, abogado de decenas de presos zapatistas y no zapatistas, y miembro de la siempre crítica Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos.

Pero incluso las organizaciones no gubernamentales que le han sido más o menos afines tienen reclamaciones contra las autoridades de Tuxtla Gutiérrez por los abusos de su policía en Marqués de Comillas y San Cristóbal de las Casas, entre otros lugares.

Odisea de indígena para llegar a una clínica en Chiapas

Señora directora:

Como mexicano radicado en el extranjero tuve la oportunidad de participar en la tercera Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (integrada por 104 personas de 15 países), que en febrero pasado viajó a Chiapas. Durante la visita viví dos experiencias, las cuales no dejan de ser abrumadoras para mí. La primera: poder observar directamente lo que acarrea una empresa de tal envergadura: sacrificios e incomodidades que llegan a pasar estos hermanos extranjeros, eternas horas de viaje, tanto en avión como en incómodos microbuses, la mayoría de las veces por caminos en pésimas condiciones -hicimos más de 14 horas a La Realidad-. Días interminables de asambleas, coordinaciones, pláticas con asesores, entrevistas, informes, desvelos, pero también de grandes satisfacciones.

La segunda tiene que ver con un matrimonio indígena. A las 6 de la mañana, en la comunidad de Santa Rosa, cuando siete compañeros estábamos esperando la camioneta que nos regresaría al poblado de La Realidad, llegó un matrimonio indígena a pedir que los lleváramos, ya que ella estaba muy enferma; padecía migraña y una infección en la garganta (su intención era ir de La Realidad a la clínica autónoma de San José del Río). Con gusto accedimos. Nos comentaron que tenían ocho horas de viaje a pie y que se habían tenido que quedar a dormir en Santa Rosa. Después de hora y media llegamos a La Realidad, pero nos informaron que por ser domingo la camioneta no saldría hasta el día siguiente. Como nosotros viajaríamos el día señalado, de nuevo se unieron al grupo. Cabe señalar que la señora ya iba muy mal, pues todo el trayecto fue vomitando. Debido a las malas condiciones

del camino nuestro transporte haría por lo menos el doble de tiempo, por lo que pedimos por favor a los conductores de una pequeña camioneta trasladar al matrimonio. Hay que agregar que para alimentarse llevaban únicamente tortillas tostadas, y a pesar de su pobreza ella lucía su impecable ropa tradicional de mujer tzeltal. En resumen, a pesar de las declaraciones gubernamentales para poder llegar a la clínica tardaron más de dos días viajando de todas las formas posibles.

Benjamín Ortiz E., Canadá

La Jornada 1 de abril de 2002

Zozobra en la selva Lacandona por violencia de paramilitares y amenazas de desalojos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 31 de marzo. El norte de la selva Lacandona se ha convertido en "territorio minado", tanto por las provocaciones de los paramilitares de Taniperla y Palestina y la violencia de Paz y Justicia en Roberto Barrios como por las amenazas de desalojo en Montes Azules. Todo esto en una zona intensamente militarizada.

El concejo municipal de Ricardo Flores Magón difundió la relación completa de comunidades en riesgo de ser desalojadas, reubicadas o afectadas dentro del territorio autónomo.

Casi la mitad de las 110 comunidades que constituyen éste, uno de los municipios en rebeldía de mayor extensión, se encuentran en situación crítica. En primer lugar, Laguna el Paraíso, Laguna Suspiro, Nuevo San Pedro, Seis de Octubre, Nuevo Guadalupe Tepeyac y Nueva Cintalapa, las cuales podrían ser desalojadas por completo de la reserva de la biosfera en fecha próxima.

Los derechos ejidales serían afectados (en sus dotaciones o ampliaciones) a causa de la reserva, en comunidades tanto zapatistas como de la Aric Independiente, e incluso priístas: San Antonio Escobar, Plan de Ayutla, Chamizal, La Culebra, Cintalapa, Limonar, Santa Rita, Taniperla, El Jardín, Villa las Rosas y Zapotal.

Además verían afectados sus derechos ejidales por la llamada zona lacandona los poblados Lacanjá Tzeltal, Santo Domingo, Arroyo Granizo, Plan de Guadalupe y Niños Héroe.

Otras comunidades serían mutiladas directamente por la "zona de amortiguamiento": Monte Líbano, Santa Elena, Censo, Taniperla, Manuel Velasco Suárez, San Jerónimo, Agua Azul, Emiliano Zapata, Perla de Acapulco, El Zapotal, San Caralampio, San José, Calvario, Nuevo Monte Líbano, Guadalupe San Luis, Sibal, San Francisco, Infiernillo, Zaragoza y Lacandón.

Y todavía se agregan las comunidades afectadas por la zona de protección forestal en el río Tulijá: San Jerónimo Tulijá, Ranchería Paraíso Tulijá, Ranchería San Isidro, Ranchería San Felipe, Ranchería San Pedro, Ranchería San Marcos, Río Jordán, San Juan y Jol Tulijá.

Asesinato en Roberto Barrios

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la zona Salto de Agua-Palenque denunció la desaparición de una persona de filiación priísta en el ejido Roberto Barrios.

La esposa del desaparecido, Virginia Méndez Gómez, acudió con el agente municipal oficial del ejido para darle a conocer que su esposo, José Alirio Miranda Chávez, de nacionalidad hondureña y radicado en el ejido, "salió a pescar el día primero de marzo en la tarde, invitado por Gustavo Méndez Balcázar, y ya no regresó a su casa".

La señora sospechaba que lo habían ejecutado, porque la persona que lo invitó a pescar tuvo una riña con él, y lo culpaba también de un robo en la casa de Simón Díaz Oleta, quien el 24 de febrero acusó a Miranda Chávez de robarle un televisor, una grabadora, un rifle y ropas.

El pasado viernes 29 fue encontrado el cadáver de Miranda Chávez dentro de una fosa mal cavada, en las proximidades de la comunidad y el río.

Observadores civiles y defensores de derechos humanos señalaron hoy, en carta dirigida a La Jornada, que varios agentes del Ministerio Público ingresaron prepotentemente a la comunidad en vehículos con placas de Campeche, y uno sin placas, "para investigar los hechos".

Tratando a la población como si todos fueran sospechosos, los agentes del MP obligaron a los indígenas a exhumar el cadáver, sin el equipo ni el personal adecuados, en pésimas condiciones de higiene. El hoy occiso apareció mutilado y con su caña de pescar al lado. Al retirarse, casi a la una de la tarde, los agentes dijeron que el diagnóstico de la necropsia estaría listo en 72 horas.

Según testimonios recabados por el municipio autónomo El Trabajo, a las 10 de la noche del 2 de marzo, Díaz Oleta se presentó en casa del desaparecido, armado con rifles y machetes en la cintura, amenazando de muerte a su familia, y al no encontrarlo fue a la casa de Cristóbal Méndez Pérez (suegro del desaparecido), a quien amenazó "apuntando de arriba abajo con el cañón".

Las autoridades autónomas (que ya habían denunciado la desaparición y el posible asesinato) culpan del crimen a Carmen Cruz Balcázar, Tomás Cruz Balcázar, Humberto Balcázar Mendoza, Mariano Pérez López, Asisclo Pérez Gómez y Rubén Pérez De Mesa.

Por medio de la red, el concejo autónomo exige que se deslinde a las bases de apoyo zapatistas de toda responsabilidad por la desaparición de José Alirio, "ya que los agresores son los mencionados, como lo demostró el agente municipal oficial Francisco Pérez Pérez, quien en un oficio dirigido a la agencia estatal de investigación de Palenque señala a Gustavo Méndez Balcázar como la última persona que vio con vida al esposo de la señora Virginia".

La red de defensores solicita la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales. Los observadores civiles, a su vez, señalando las anomalías en la investigación ministerial, consideran posible "que las autoridades no actúen conforme a derecho".

Tanto la red como los observadores civiles que presenciaron la exhumación en Roberto Barrios responsabilizan a la presidencia municipal de Palenque, la PGJE y el gobierno federal de cualquier agresión o cacería de brujas contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las autoridades priístas de Palenque, siempre hostiles con los zapatistas, han solapado los delitos de los priístas de la localidad, presuntos miembros de Paz y Justicia.

Las bases de apoyo del EZLN exigen la investigación profunda de la desaparición y el asesinato de Miranda Chávez, así como de los demás crímenes ocurridos en Roberto Barrios respecto a los cuales jamás se han realizado investigaciones: la muerte de Rafael Gómez Pérez y las agresiones sufridas el 12 de marzo de 1997; el asesinato de Trinidad Cruz Pérez, el 14 de marzo de 1998, y el fallecimiento de una niña de 2 años de edad a causa de las quemaduras que sufrió el 24 de mayo de 1998 por un incendio provocado.

Otra muerte sin resolver (aunque los asesinos están identificados) es la de José Tila, poco después de presentar denuncias ante la primera Comisión Internacional de Observación sobre la violencia de militares y priístas en la región. Las autoridades autónomas demandan también que se investiguen otras agresiones, amenazas y hostigamientos, ya denunciados, sin que en ningún caso se haya hecho justicia.

El concejo autónomo dio a conocer más tarde un comunicado donde declara: "Nos deslindamos de la desaparición y muerte de esta persona; nosotros los zapatistas somos gente que estamos trabajando en la construcción de la autonomía indígena, y en este proceso es muy importante el respeto a los derechos humanos. Por esto aclaramos que en este problema no tuvimos nada que ver y no queremos que nos involucren con la siembra de estupefacientes ni con otros crímenes".

La Jornada 14 de mayo de 2002

Hipocresía y derechos humanos

Luis Hernández Navarro

El fantasma del zapatismo se le aparecerá este miércoles a Vicente Fox en Europa. Para su pesar descubrirá que en cuestión de derechos humanos México no ha dejado de ser observado, aunque juegue a convertirse en observador.

El jefe del Ejecutivo difunde en la opinión pública una visión idílica en torno al conflicto de Chiapas y a la situación de los derechos humanos en México. En una entrevista reciente con el diario El País (5 de mayo de 2002) aseguró: "la ley de derechos indígenas es la más avanzada y vanguardista del mundo. Estamos en paz en Chiapas..."

Las afirmaciones presidenciales serán desmentidas por el más reciente informe que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en Chiapas (CCIODH) presentará en el Parlamento Europeo hoy martes 14 de mayo. Un día después una delegación de la comisión entregará una copia del documento al mandatario mexicano cuando intervenga en Estrasburgo.

La CCIODH estuvo integrada en esta su tercera visita de trabajo a México por 104 personas de 14 países. Su objetivo fue evaluar, un año y medio después de la toma de posesión del gobierno de Vicente Fox, la situación del conflicto en Chiapas. Entre el 16 de febrero y el 3 de marzo de 2002 efectuaron 130 entrevistas con distintos interlocutores: institucionales, sociedad civil y bases de apoyo zapatistas.

Las conclusiones a las que llegaron desmienten categóricamente las afirmaciones presidenciales. La aprobación del proyecto de iniciativas constitucionales por parte del Congreso de la Unión está muy lejos de ser la legislación "más avanzada y vanguardista del mundo" y, por el contrario, no ha dado satisfacción a los pueblos indios, que no ven reflejada en ella la esencia de los acuerdos de San Andrés: no establecen que las comunidades deben ser entidades de derecho público, y no reconocen a los pueblos como

sujetos de la ley ni depositarios políticos de los derechos a la libre determinación y la autonomía.

En Chiapas no hay paz. Los sobrevuelos de aeronaves militares federales siguen sembrando zozobra en las comunidades. Los patrullajes y retenes del Ejército Mexicano han ido aumentando paulatinamente y ya se ha hecho costumbre que los soldados improvisen sus puestos de control en los alrededores de las poblaciones para acosar e intimidar a los indígenas, sometiéndolos a interrogatorios e impidiendo el libre tránsito de los pobladores.

Lejos de contener a los grupos paramilitares como Paz y Justicia (cuyos dirigentes han sido liberados inexplicablemente), éstos siguen generando múltiples conflictos, cerrando caminos, aplicando una política de terror, asesinatos y agresiones constantes contra las comunidades zapatistas, apoyados, como siempre, por las viejas estructuras municipal y comunal priístas, y gozando de la complicidad por omisión y comisión del ejército y los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales.

El problema de los desplazados por la guerra y la contrainsurgencia sigue sin resolverse. Los despojos y asesinatos que arrojaron al exilio interior a miles de choles y tzotziles, en su mayoría bases de apoyo del EZLN, se mantienen impunes. Hasta ahora el problema de los desplazados no ha sido atendido en su verdadera dimensión. Ni el gobierno federal ni el del estado han asumido que son personas forzadas a abandonar sus comunidades por la violencia paramilitar. En consecuencia impulsan retornos de desplazados en condiciones de inseguridad y bajo débiles acuerdos de reconciliación que no han sido precedidos por la justicia ni por la reparación de los daños causados a las víctimas.

Pero, más allá del informe de la CCIODH, la situación de los derechos humanos en México sigue siendo preocupante. En Chiapas han sido encarcelados durante los últimos meses 17 zapatistas más. El crimen de Digna Ochoa no se ha esclarecido aún, y otros abogados han sufrido amenazas de muerte. Un grupo de jóvenes estadounidenses que homenajearon al batallón de San Patricio el pasado primero de mayo fueron deportados del país. A pesar de que se creó una fiscalía especial para supuestamente investigar el problema de los detenidos-desaparecidos, durante los primeros meses del gobierno de Vicente Fox ha habido 15 casos de detenidos-desaparecidos, y recientemente un detenido fue asesinado, presumiblemente durante la tortura.

Simultáneamente, la antigua defensora de derechos humanos, efímera embajadora sin aprobación del Senado y ahora subsecretaria de Relaciones Exteriores, Mariclaire Acosta, cabildeó (en una nueva versión del voto útil) con los senadores de la República para aprobar dos modificaciones a la Convención sobre Desapariciones Forzadas mediante las cuales se garantiza la impunidad de quienes planearon y ejecutaron esa aberrante política.

Para justificar su acatamiento a los deseos de Washington en torno a Cuba el gobierno mexicano invocó la causa de los derechos humanos. Que no se llame a engaño cuando la comunidad internacional lo juzgue con la misma vara.

Presentará la CCIODH al Parlamento Europeo informe sobre violaciones a derechos en Chiapas

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) presentará hoy en el Parlamento Europeo un informe sobre la situación de las garantías en Chiapas, en el que aborda temas como el origen de los grupos paramilitares, los sobrevuelos y patrullajes castrenses en las comunidades indígenas y la reforma constitucional en la materia "que no satisface a las etnias".

Una copia del informe, con recomendaciones y conclusiones, le será entregada al presidente Vicente Fox Quesada el miércoles 15, cuando asista al Parlamento Europeo, donde tendrá una intervención, en el marco de su gira de trabajo por el viejo continente.

Dicha comisión -integrada por miembros de 14 países europeos- estuvo de visita en el país del 16 de febrero al 3 de marzo pasado. Visitó Chiapas y Querétaro y se entrevistó con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República (PGR), cancillería y Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instancias.

En Chiapas se entrevistaron con miembros de la sociedad civil, indígenas zapatistas, desplazados, grupos identificados como paramilitares y autoridades. Como resultado de su visita, hoy presentarán un informe de la situación de los derechos humanos en esa entidad y, en particular, en las comunidades indígenas.

La CCIODH destaca que la aprobación de la reforma constitucional en materia indígena "no ha dado satisfacción a los pueblos indios, que no ven reflejadas en ésta la esencia de los acuerdos de San Andrés, al no reconocer a las comunidades como entidades de derecho público. Tampoco reconoce a los pueblos como sujetos de ley ni depositarios políticos de los derechos de libre determinación y autonomía".

Subraya la comisión que la iniciativa de la Cocopa "es la única" que puede restablecer las condiciones mínimas para el diálogo de paz, cuya ruptura ha significado enormes sacrificios para los pueblos indios, no sólo de la zona de conflicto, sino también de todas las regiones en las que hay presencia indígena.

Durante su visita a las poblaciones indígenas de Chiapas, la CCIODH constató que los sobrevuelos de los militares "siguen sembrando zozobra en las comunidades". Además, apuntan, los patrullajes y retenes del Ejército Mexicano se han incrementado paulatinamente, y ya se ha hecho costumbre que los soldados improvisen puestos de control en los alrededores de las poblaciones para acosar e intimidar a los indígenas, sometiéndolos a interrogatorios e impidiendo el libre tránsito.

El origen de los grupos paramilitares

La CCIODH cita en su informe que el origen de los grupos paramilitares está dentro de un esquema de contrainsurgencia que se enmascara en agresiones por problemas de tierras, confrontaciones partidarias, conflictos religiosos, enemistades personales, venganzas familiares o simplemente accidentes, ocultando de este modo la estrategia paramilitar de control, desestabilización, faccionalización y represión selectiva, como parte de una guerra "diseñada y dirigida desde las más altas estructuras del poder".

Agrega: "Lejos de contener a los grupos paramilitares como Paz y Justicia, cuyos dirigentes han sido liberados inexplicablemente, éstos siguen generando múltiples conflictos, cerrando caminos, aplicando una política de terror, asesinatos y agresiones constantes contra las comunidades zapatistas, apoyados, como siempre, por las viejas estructuras municipal y comunal priístas, y gozando de la complicidad, por omisión y comisión, del Ejército y los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales".

Sostiene la CCIODH que el problema de los desplazados sigue sin resolverse. Los despojos y asesinatos que arrojaron al exilio a miles de choles y tzotziles, en su mayoría bases de apoyo del EZLN, se mantienen impunes. "Hasta ahora el problema de los desplazados no ha sido atendido en su verdadera dimensión. Los gobiernos federal y del estado impulsan retornos de desplazados en condiciones de inseguridad."

La Jornada 15 de mayo de 2002

En materia de derechos humanos no hay avances en México: CCIODH

Estrasburgo, 14 de mayo. Los cambios en el panorama político no han implicado una mejora significativa de la situación de los derechos humanos en México, estableció la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), al rendir su informe, producto de una visita de observación a territorio mexicano en febrero y marzo pasados.

La entrega del documento al Parlamento Europeo ocurrió durante la visita oficial del presidente Fox a esta ciudad.

Bernard Riguet, de Francia; Julián Saldariaga, de España y Helena Roux, a nombre de la CCIODH, señalaron que después de haberse realizado dos informes sobre México en materia de derechos humanos (1998 y 1999), queda claro que la ausencia de respuestas gubernamentales en el conflicto chiapaneco no contribuyó a la búsqueda de una solución justa y digna en esa entidad.

En este contexto sugirieron a los parlamentarios europeos que evalúen "cuidadosamente" la naturaleza de los acuerdos de cooperación comercial entre México y la Unión Europea, así como los convenios firmados en el ámbito militar.

Añadieron que el deterioro de la situación económica en las comunidades de Chiapas y el aumento de problemas entre ellas se debe a la distribución selectiva de los apoyos gubernamentales para el desarrollo.

Advirtieron que el establecimiento del plan Puebla-Panamá podría empeorar la situación de los indígenas, que de por sí ya viven un situación conflictiva.

El Universal 15 de mayo de 2002

Critica ONG situación que prevalece en Chiapas

Liliana Alcántara

Las causas que generaron la rebelión indígena en Chiapas siguen vigentes y además falta voluntad política para encontrar una solución al conflicto, asegura la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.

En un informe que será presentado hoy al presidente Vicente Fox en su gira por la Unión Europea, el organismo explica que el estado continúa militarizado, que el problema de los desplazados por la guerra sigue sin resolverse y que los indígenas son excluidos de los programas sociales.

Recomienda al gobierno de México cumplir con los Acuerdos de San Andrés, desmilitarizar al estado, desarmar a los grupos paramilitares, indemnizar a los desplazados y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé marcha atrás a las reformas constitucionales en materia indígena.

La Comisión Civil Internacional se formó en Europa tras la masacre de Acteal que ocurrió el 22 de diciembre de 1997 y en la que fueron asesinados 45 campesinos.

Tras una misión de observación que realizaron en Chiapas del 16 de febrero al 2 de marzo de este año, los activistas europeos constataron que la tortura persiste, que las condiciones de inmigración en la frontera sur adquieren tonos alarmantes y que las comunidades autóctonas se sienten desprotegidas frente al Plan Puebla-Panamá.

Critica la actuación del Ejército y de elementos de la Secretaría de Marina por participar en actividades que no les corresponden como el control migratorio.

Presencia militar

En el informe, la comisión asegura que si bien la retirada de los militares se realizó en las siete posiciones demandadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el número total de efectivos no se redujo y las tierras expropiadas para la construcción de las posiciones militares no fueron devueltas a sus legítimos propietarios.

Indica que desaparecieron la mayoría de los controles y retenes fijos, pero hay constantes patrullajes y sobrevuelos de aeronaves militares que "siguen sembrando zozobra en las comunidades e impiden el libre tránsito de los pobladores".

En cuanto a los paramilitares, el organismo civil europeo constató que aquellos todavía generan múltiples conflictos "cerrando caminos, aplicando una política de terror, asesinatos y agresiones constantes contra las comunidades zapatistas".

Asegura que estos grupos armados están "apoyados, como siempre, por las viejas estructuras municipal y comunal priistas, y gozando de la complicidad por omisión y comisión del Ejército mexicano y de los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales".

Milenio 15 de mayo de 2002

En México persiste la violación de los derechos humanos

Marco Appel Corresponsal, Bruselas, Bélgica

Una delegación de observadores europeos provenientes de 14 países denunció ayer en un extenso reporte que la situación sobre la violación a los derechos humanos en México no ha mejorado de manera sustancial con el cambio de régimen.

"El contexto es el que ha cambiado, pero la problemática que hemos destacado en informes anteriores no creemos que haya cambiado sustancialmente [...] ni (tampoco) la resolución de las causas que provocan las violaciones a los derechos humanos", aseguró la francesa Elena Roux, representante de la Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos en México, el organismo responsable del reporte que ayer fue presentado en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

La presentación de este reporte se da un día antes de la comparecencia del presidente Vicente Fox en el pleno de la Eurocámara, algo que los autores europeos del informe afirman que es una "coincidencia". Los 104 observadores que conformaron la delegación consideraron oportuno elaborar el balance de la situación de los derechos del hombre en México tras un año de gobierno del presidente Fox y después de haber realizado dos anteriores reportes bajo régimen priista, uno en abril de 1998 –motivado por la masacre de Acteal– y el segundo en marzo del 2000.

La investigación de campo tuvo lugar en la ciudad de México y en Chiapas del 16 de febrero al 3 de mayo de este año, tiempo durante el cual los europeos recibieron “centenares de denuncias escritas”, cuenta Roux. “Tenemos cajas enteras de denuncias de todo tipo: desaparición, tortura, impedimento de acceso a la justicia, problemas agrarios, detención injusta, desplazamientos de población, indemnización de bienes perdidos, acoso militar y paramilitar”.

En el extenso y detallado reporte de 400 páginas cuyo contenido fue posible después de entrevistar a 130 personas entre funcionarios, dirigentes de ONG e indígenas, la comisión dirige 11 recomendaciones al gobierno mexicano. Entre las más importantes se encuentran el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y las demás señales que ha pedido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para reanudar las conversaciones de paz en Chiapas; el respeto al proyecto de iniciativa de reforma constitucional de derechos indígenas de la Comisión de Concordia y Pacificación; la liberalización de todos los presos de opinión sin que se produzcan nuevas detenciones; la devolución a las comunidades de los terrenos expropiados por el gobierno para la instalación de los campamentos militares en Chiapas que ya han sido desmantelados; y la puesta en marcha de un mecanismo que garantice la aplicación de la cláusula democrática. “Hasta ahora el gobierno ha intentado dar soluciones de nivel local y económico que no solucionan un problema más profundo”, señaló Roux.

Los europarlamentarios verdes y comunistas (que copatrocinaron la presentación del reporte) y los socialistas, se han mostrado interesados en apoyar las recomendaciones y tomar cartas en el asunto para atender mejor la situación de los derechos humanos en México en el marco de la cláusula democrática que contiene la parte política del tratado de libre comercio con la UE.

El fantasma de Digna Ochoa

Los observadores europeos se mostraron preocupados por la tardanza en la resolución del asesinato de la luchadora mexicana por los derechos humanos Digna Ochoa, ocurrido en octubre pasado en su despacho de la ciudad de México, y de hecho dedicaron a su memoria los trabajos.

La preocupación europea sobre la cuestión se vio reflejada ayer durante la visita presidencial al Senado belga, cuando en la prevista sesión de preguntas el legislador Jose Dubie cuestionó a Fox sobre los esfuerzos judiciales de su gobierno para esclarecer el atentado, teniendo en cuenta que un reciente reporte de la ONU habla de un 90% de impunidad a los delitos cometidos en México, le recordó el senador.

Fox respondió que su gobierno “repudia” el crimen de Ochoa “desde su origen”, que “está en manos de la justicia resolverlo” y que en eso “se está trabajando”. “Se está trabajando en distintas hipótesis, algunas que no tienen que ver con situaciones de derechos humanos, y no habría que juzgar hasta que no venga una resolución de la Procuraduría del Distrito Federal”, dijo Fox, que finalmente confió en que cualquier resolución “estará apegada a la justicia”.

Tras la ronda de preguntas la senadora socialista belga Anne Marie Lizin, que cuestionó a Fox sobre el combate que está librando su gobierno para atacar la pobreza en el país, declaró que “además de defender los derechos humanos ‘clásicos’, hay que poner también atención en México a la defensa de los derechos sociales y económicos”.

La Jornada 16 de mayo de 2002

Gobierno y Ejército, principales acusados por la guerra sucia: Fox

JUAN MANUEL VENEGAS ENVIADO

Estrasburgo, 15 de mayo. El gobierno y el Ejército son "los principales acusados" por la "muchacha represión" y los "muchos desaparecidos" que hubo en México a partir del movimiento estudiantil de 1968 y en las décadas siguientes de los 70 y 80, aceptó aquí el presidente Vicente Fox Quesada, ante el pleno del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Informó que para investigar esas acusaciones se creó una fiscalía especial, que habrá de "averiguar y profundizar" sobre todos esos hechos y, cuando sea factible, se fincarán las responsabilidades penales que correspondan; si no se puede, por algún impedimento legal, "por lo menos la ciudadanía mexicana conocerá de estos hechos bochornosos y vergonzosos".

En su segundo día de gira, el mandatario se presentó además ante el Parlamento Europeo. En ambas instancias los temas que dominaron fueron los derechos humanos y la transición al nuevo régimen. Entre los representantes de las naciones europeas surgieron diversas preguntas sobre la situación de los indígenas mexicanos y el conflicto en Chiapas, y manifestaron su preocupación por los "riesgos" que hay en México para los defensores de los derechos humanos.

El Parlamento Europeo conoció desde la víspera el informe que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) elaboró. La presentación de este documento -en el que se señala que persiste la militarización en territorio chiapaneco y no se ha frenado la presencia de grupos paramilitares, entre otros problemas que afectan el proceso de paz- fue facilitada por parlamentarios del grupo de los Verdes y de la Izquierda Unitaria Europea.

Acerca del conflicto chiapaneco, Fox insistió en que su gobierno "ha dado muestras claras de su voluntad política" para reanudar el diálogo con los zapatistas y distender la situación; asimismo, dijo, "hemos emprendido programas de inversión, desarrollo y atención a las necesidades de las comunidades indígenas de todo el país". Igualmente, defendió la ley indígena aprobada por el Congreso, porque "es de vanguardia y me parece que se compara con verdadera ventaja con las que existen en otros países y que, por supuesto, está dando paso a un trato digno a las comunidades indígenas".

Respecto a la preocupación que hay en Europa por los peligros que "siguen teniendo lugar en México para los defensores de derechos humanos y voluntarios", según expresó el delegado del Reino Unido, Fox aceptó que "desgraciadamente" persisten las amenazas contra los activistas, por lo que ofreció como una alternativa para poner fin a esa situación "la apertura total del país para las organizaciones no gubernamentales extranjeras y, a través de esto, promover más y más una cultura de derechos humanos".

Aquí retomó el caso de las investigaciones por el asesinato de la abogada Digna Ochoa - también entre las "preocupaciones" de los europeos-, asegurando que su gobierno aportará toda la información que requiera la Procuraduría del Distrito Federal, encargada de las pesquisas, habida cuenta de que "alguna persona" del Ejército Mexicano ha sido relacionada con el homicidio.

A su llegada a Estrasburgo, el mandatario mexicano tuvo como primera actividad una reunión con el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Ahí, Fox recibió el "reconocimiento" de todos los participantes por "los cambios" que ha emprendido en el

país. El jefe del Ejecutivo federal dijo: "Los años más recientes de la historia mexicana se han caracterizado por un significativo proceso de renovación política, económica y social, que estamos decididos a consolidar; una nueva generación de mexicanos decidió forjar, el 2 de julio de 2000, un nuevo futuro para nuestra nación".

Hoy -añadió- "somos un país plenamente democrático, en donde los ciudadanos gozan de una libertad sin precedente y trabajamos unidos por un desarrollo que beneficie a todos". Dijo que el humanismo es lo que caracteriza a su gobierno y se comprometió a llevar la transición hasta consolidar un régimen donde la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos "sean parte esencial de nuestra democracia".

Luego de su mensaje, el delegado de Irlanda le pidió que planteara ante el pleno de ministros sus expectativas al haber creado la fiscalía especial que investigará los acontecimientos de la llamada guerra sucia.

El objetivo es "averiguar los delitos, las violaciones a los derechos humanos y por ello se trabaja, desde 1968, en el que se dio el doloroso caso de la muerte de muchos estudiantes, y lo mismo para las décadas de los 70 y 80, en que hubo mucha represión y hubo muchos desaparecidos. El principal acusado, por supuesto, es el gobierno y el Ejército".

Más tarde, Fox acudió al Parlamento Europeo, donde destacó que su política de derechos humanos tiene dos ejes: el primero consiste en promover el apoyo y la cooperación de los organismos internacionales y de la comunidad mundial a favor de todas aquellas acciones que propicien los cambios requeridos para superar los rezagos en esta materia; el segundo tiene que ver con el reconocimiento y promoción, en el ámbito internacional, de los derechos humanos.

"México ha decidido desempeñar un papel activo en distintos foros mundiales para fortalecer el escrutinio" en todas las naciones, a fin de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales. Y, según dijo, esta "preocupación" por lo que ocurre dentro y fuera del país "nos ha llevado a emprender una lucha sin tregua por la defensa de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria".

Al respecto, manifestó su repudio a la pena de muerte que se ejerce en Estados Unidos, por lo que pidió el respaldo de la Unión Europea para promover la abolición de este castigo que representa una violación del más elemental de los derechos.

Por otra parte, en el informe que la CCIODH elaboró sobre Chiapas, y que presentó ante el Parlamento Europeo, se destaca la militarización que persiste en esa entidad. "Es claramente constatable la persistencia de los patrullajes, especialmente en el municipio de Ocosingo y en toda la zona fronteriza con Guatemala". Además, "los sobrevuelos de aeronaves militares federales siguen causando zozobra en las comunidades; los patrullajes y retenes militares han ido aumentando paulatinamente y ya se ha hecho costumbre que los soldados improvisen sus puestos de control en los alrededores de la poblaciones para acosar e intimidar a los indígenas".

Proceso 19 de mayo de 2002

Fox y CCIODH: Dos versiones en el PE

Fox y CCIODH: Dos versiones en el PE
Anne Marie Mergier

Estrasburgo (Francia). En menos de 24 horas los diputados europeos pudieron oír dos versiones radicalmente opuestas de la situación que prevalece actualmente en México. Casi idílica fue la que presentó Vicente Fox durante su estancia relámpago en el Parlamento Europeo el pasado 15 de mayo.

Después de una visita oficial a Bélgica y antes de salir a Madrid para participar en la II Cumbre Unión Europea/America Latina y el Caribe el primer mandatario fue invitado a tomar la palabra ante la asamblea plenaria del PE por Patrick Cox, presidente de esa institución.

Fue con voz firme y entusiasta que Fox pronunció un discurso de media hora cuya meta obvia era seducir a los eurodiputados.

Empezó por una descripción de la democracia mexicana, ya no en vía de consolidación, sino «firme y robusta» en la que impera un estricto balance de poderes destacando «la total independencia» del Congreso y de la Justicia. «Eso es algo totalmente nuevo en nuestro país», insistió Fox.

Multiplicó ejemplos para ilustrar los esfuerzos de su gobierno en el campo social. Mencionó 4 millones de becas otorgadas a escolares que pertenecen a clases desfavorecidas, un proyecto de 330 000 becas más que permitirán a jóvenes indígenas acceder a la universidad y la pronta construcción de 550 000 viviendas populares. Sin dar cifras evocó grandes progresos en el campo de la salud y luego habló de su lucha para erradicar la corrupción del país. «Una de mis grandes prioridades», precisó.

Honestidad, transparencia y eficacia caracterizan, según el presidente mexicano, los funcionarios de su gobierno.

Consciente de que el Parlamento Europeo está pendiente de la situación de Chiapas desde el surgimiento a la luz pública del EZLN el 1 de enero de 1994, Fox tocó muy breve y vagamente el tema sin jamás pronunciar la palabra «zapatistas», ni aludir a la ruptura del diálogo con ellos.

«Mi gobierno siempre manifestó su voluntad de negociar. Somos un gobierno humanista», enfatizó antes de referirse a la reforma constitucional que implica la ley sobre los derechos indígenas aprobada por el Congreso.

Por supuesto callo el rechazo de esa ley por parte de los Zapatistas y de numerosas comunidades indígenas del país, en cambio habló de fuertes inversiones en la región y de un esfuerzo particular de su gobierno para favorecer su desarrollo.

En el México descrito por Fox, Chiapas dejó de ser un problema...

Mucho más prolijo se mostró el presidente mexicano cuando habló de su oposición a la pena de muerte en Estados Unidos. Era una de sus cartas fuertes en esa operación de seducción del Parlamento Europeo. Surtió resultado.

Una salva de aplausos interrumpió el discurso del Jefe de Estado cuando afirmó su oposición a la pena de muerte y habló de la lucha de su gobierno para salvar a los mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos. Más fuertes aun fueron los aplausos cuando agradeció a los eurodiputados haberle ayudado a arrancar de la muerte a Gerardo Valdés condenado en el Estado de Oklahoma...

El presidente mexicano cerró su alocución con una descripción del Plan Puebla Panamá, tratando entusiasmar a los eurodiputados y, más allá de ellos, a eventuales inversionistas europeos.

Muy distinta fue la intervención de tres integrantes de la Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos en México (CCIODH) que presentaron su informe en el mismo recinto del Parlamento Europeo, el 14 de mayo, en víspera de la llegada de Vicente Fox a Estrasburgo.

Invitados por dos grupos parlamentarios el de los Verdes y de la Izquierda Unida- Hélène Roux, periodista francesa radicada en Nicaragua, Bernard Riguet, asesor en una compañía de negocios internacionales que vive alternativamente en Francia y Canadá y Julian Saldarriaga, catalán, que se desempeña como concejal en el municipio de San Vicenç en los alrededores de Barcelona, manifestaron su honda preocupación ante la situación de Chiapas que compararon con la «calma tensa que precede fuertes tempestades», y expresaron su convicción de que «la clase política mexicana no manifiesta la mínima voluntad de buscar una solución negociada al conflicto».

La CCIODH integrada por 104 observadores oriundos de 14 países y apoyada por centenares de organizaciones de Europa, América Latina y Canadá, estuvo en México del 16 de febrero al 3 de marzo de este año. Sus miembros realizaron 130 entrevistas todas reseñadas en el informe de 420 páginas que - entregaron a los eurodiputados- con autoridades mexicanas tanto en el Distrito Federal como en el Estado de Chiapas, con representantes de las comunidades indígenas (Zona Norte, Zona de los Altos, Municipio de Ocosingo, Selva Lacandona II, Municipio de Altamirano y Zona Frontera), y también con múltiples organizaciones y personajes de la sociedad civil mexicana. La Comisión visitó también cuatro centros penitenciarios dos en Chiapas, uno en Querétaro y otro en Tabasco.

Esa radiografía minuciosa y rigurosa de la situación de Chiapas, que contradice drásticamente todos los discursos oficiales mexicanos, fue presentada por primera vez durante la última sesión de trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU y, según explicó Hélène Roux a los eurodiputados fue adoptada como documento oficial de dicha Comisión.

Es la tercera vez que la CCIODH, integrada exclusivamente por miembros de la sociedad civil internacional, visita México. Su primer viaje a Chiapas se dio en 1997 y fue motivado por la profunda emoción que causó a nivel mundial el asesinato de 45 campesinos en Acteal. Su segunda visita a México en 1998 provocó bastante hostilidad por parte del gobierno de Ernesto Zedillo.

«Este año, explica a la reportera Hélène Roux, que participo a las tres misiones de la CCIODH, debemos reconocer que las autoridades mexicanas no nos manifestaron animosidad alguna, pero lo que observamos no nos inspiró el mínimo optimismo».

Queda debidamente documentado en el informe el hecho de que Chiapas continúa militarizado y que su población sigue siendo víctima de esa fuerte presencia del ejército en el estado del sureste. Sobran pruebas sobre los operativos que siguen llevando a cabo los grupos paramilitares en la región.

Destacó Hélène Roux en el Parlamento Europeo: «Los grupos paramilitares entraron en una etapa de reflujo ante la derrota electoral y el desplazamiento del PRI de los gobiernos federal y estatal, pues quedaron sin cobertura oficial. Sin embargo constatamos que continúan conservando su estructura, su organización interna y sus armas. Nos pareció muy mal

sintoma la liberación repentina de dirigentes de movimientos como Paz y Justicia que habían sido detenidos.

«Durante la estadia de la CCIODH en Mexico se apreso a Diego Vasquez Pérez, lider del grupo Desarrollo, Paz y Justicia .Seguimos su caso de cerca. Pero esa nueva detencion no puede tapar la realidad. Siguen actuando los paramilitares, cometen asesinatos, agreden en forma permanente a las comunidades zapatistas, gozando de la complicidad pasiva o activa del Ejercito mexicano y de los cuerpos de seguridad de diversas dependencias gubernamentales.»

El informe de la CCIODH detalla la situación de los desplazados internos que sigue sin resolverse y da multiples ejemplos de la impunidad de la que gozan quienes agreden a los indígenas cuyo acceso a la justicia continua siendo tan imposible como en años anteriores.

Los observadores de la sociedad civil internacional describen tambien el deterioro de la situación económica y social en la comunidades indígenas y explican que los programas de desarrollo lanzados por las autoridades mexicanas son a menudo percibidos por la población como meras manifestaciones de proselitismo electoral.

El documento de la CCIODH recoge tambien los multiples temores que inspiran a las comunidades de Chiapas el Plan Puebla Panama, caballo de batalla del gobierno foxista:

Recalco Hélène Roux: «Las comunidades se sienten desprotegidas ante ese Plan, temen que las tierras indígenas se conviertan en el blanco de grandes intereses económicos por sus riquezas naturales y su biodiversidad.El Plan Puebla Panama genera inquietud e inconformidad toda vez que las comunidades indígenas no cuentan con el instrumento de control de los recursos, territorios y formas jurídicas de ejercicio de autonomía que representaba para ellas la ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) producto de los acuerdos de San Andrés.»

La intervención de los tres representantes de la CCIODH provoco debate entre los diputados europeos que asistieron a la presentación de su informe, al igual que la intervención de Jesus Torres Nuno, secretario general del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la compañía huleira Euzkadi, S.A ubicada en el Estado de Jalisco.

Euzkadi es la filial mexicana de la multinacional alemana Continental Tire. Según explico Torres Nuno a los parlamentarios europeos, el pasado mes de diciembre los directivos locales de la fábrica intentaron modificar el contrato laboral de los obreros exigiendoles mas horas de trabajo diario ,pidiendole inclusive trabajar los domingos.

El sindicato rehuso ceder ante las presiones de la dirección y los trabajadores se declararon en huelga. Cerro la fábrica. Desparecieron los directores de la empresa . Desde entonces 1 164 obreros y sus respectivas familias (alrededor de 9 mil personas) carecen de todo ingreso.

Torres Nuno denunció la falta total de apoyo de Carlos Abascal, Secretario de Trabajo y de Previsión Social.

Por ser Continental Tire una poderosa empresa alemana, el despido violento de los trabajadores de Euzkadi llamo particularmente la atención de los eurodiputados y amenaza con convertirse en un caso emblemático.

Después de participar a la cumbre social de Madrid (17-18 de mayo), acontecimiento paralelo a la Cumbre oficial que reunió a los jefes de Estado y gobierno de todos los países de

America Latina, el Caribe y de la Union Europea, Jesus Torres Nuno y Oscar Rugio Gonzalez, del mismo sindicato, viajaron a Austria donde otra filial de Continental Tire despido tambien a sus obreros y luego a Alemania donde los esperan sindicalistas de esa empresa.

Las intervenciones de la CCIODH y de los sindicalistas mexicanos tuvieron un eco inmediato. Al dia siguiente, antes de recibir a Vicente Fox, la asamblea plenaria del Parlamento Europeo debatio durante tres horas sobre la Cumbre Union Europea/America Latina .

Cabe recalcar que numerosos diputados, de distintos grupos politicos, se mostraron una tanto reticentes ante estas «grandes misas internacionales» que despiertan cada vez mas criticas o escepticismo en la opinion publica mundial.

Entre todos los casos mencionados crisis de Argentina, situacion social apremiante en America Central y los paises andinos, inestabilidad politica en Venezuela, violencia en Colombia, surgio el tema de Mexico.

Fue Monica Frassoni, copresidenta con Daniel Cohn Bendit, del Grupo de los Verdes quien se expreso con mas fuerza al respecto, reiterando la inquietud de los eurodiputados ante las graves violaciones de los derechos humanos en Mexico. Frassoni insto ademas a los parlamentarios a mostrarse mucho mas atentos a los abusos laborales perpetrados por las multinacionales europeas en America Latina, citando el caso concreto de Continental Tire en Jalisco.

Tanta repercusion tuvo ese ultimo punto que quedo plasmado en la resolucion final del PE sobre la segunda Cumbre Union Europea/America Latina y el Caribe. El punto n° 11 de ese documento estipula la necesidad para la UE dotarse de mecanismos que permitan «controlar si las multinacionales de origen europea que operan en America Latina respeten las leyes laborales y ambientales vigentes.»

Fue una verdadera hazaña intentar entregar el informe de la CCIODH y documentos sobre la crisis de Euzkadi al presidente Fox y a la delegacion parlamentaria que lo acompanaba: una veintena de diputados y senadores encabezados por Beatriz Paredes que se reunieron durante dos dias (15 y 16 de mayo) con sus homologos europeos.

El presidente mexicano estuvo siempre inasequible y los parlamentarios mexicanos no parecieron muy interesados en recoger estos documentos.

Peor aun, segun lo denunciaron a la corresponsal los sindicalistas mexicanos y su acompanante frances, asistente del eurodiputado Alain Krivine, trotskista, fue a pedido de varios diputados mexicanos que el servicio de seguridad del Parlamento Europeo les confisco sus materiales y les pidio cortesmente no acosar a los congresistas que se dirigian hacia la sala donde Fox dio una breve rueda de prensa.

Frustrados tambien se quedaron los presidentes de los distintos grupos del Parlamento Europeo que no pudieron reunirse con calma con el jefe de Estado Mexicano.

Junto con un centenar de invitados participaron a una comida oficial en la que no fue posible ahondar ciertos temas como el Chiapas, literalmente escamoteado en el discurso presidencial.

Despues de esa comida Vicente Fox tomo el avion para Madrid.

